

**FEUDAL ARGENTINA:
How enduring provincial caudillos
undermine democracy and the rule of law**

**FORMOSA - SANTIAGO DEL ESTERO - CHACO -
CATAMARCA**

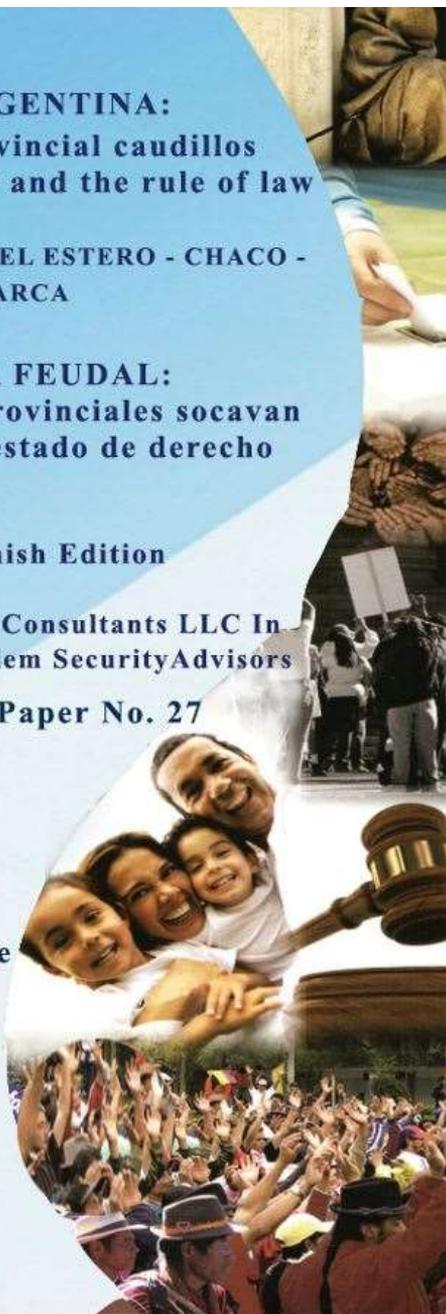
**ARGENTINA FEUDAL:
Cómo los caudillos provinciales socavan
la democracia y el estado de derecho**

English - Spanish Edition

**By Douglas Farah, IBI Consultants LLC In
collaboration with Fidelem Security Advisors**

The Democracy Paper No. 27

**Interamerican Institute
for Democracy
2025**



**ARGENTINA FEUDAL:
Cómo los caudillos provinciales
perdurables socavan la democracia y el
Estado de derecho**

**FORMOSA - SANTIAGO DEL ESTERO – CHACO -
CATAMARCA**

Por
Douglas Farah, IBI Consultants LLC In
collaboration with Fidelem Security Advisors
SRL

Democracy Paper No. 27

Spanish Edition

IBI Consultants Contributors:

Douglas Farah, President

Pablo Zeballos, director, Southern Cone

Kathryn Babineau, coordinator

Carolina Duque, data researcher

Ricardo Ferrer, independent security consultant

Fidelem Security Advisors Contributors:

Comisario Gen. (ret) Alejandro Ñamandu, CEO

Emanuel Irazabal, researcher

© Interamerican Institute for Democracy, 2025

Todos los derechos reservados

ISBN: 9798287709426

Fondo Editorial
Interamerican Institute for Democracy

2100 Coral Way, Ste. 500

Miami, FL 33145

U.S.A.

Tel: (786) 409-4554

www.intdemocratic.org

iid@intdemocratic.org

Contents

Presentación	7
Introducción	9
Panorama general.....	11
La Argentina feudal y la cuarta ola del crimen organizado transnacional	18
El modelo	22
Cuatro estudios de caso sobre caudillos del siglo XXI	28
La economía política del feudalismo.....	30
Formosa.....	35
Chaco.....	43
Santiago del Estero	54
Proyectos opacos vinculados al creciente comercio global de litio	61
Abusos que atraen la atención de organismos internacionales de derechos humanos.....	62
Catamarca.....	66
Contexto histórico	70
Conclusiones	75
Notes - Notas	78

Presentación

Por Prof. Eduardo Gamarra

Es un privilegio especial presentar este importante y oportuno trabajo de Douglas Farah, titulado "Estados Feudales en el Norte de Argentina". Douglas no solo es un destacado periodista de investigación cuya innovadora investigación ha moldeado profundamente nuestra comprensión sobre el crimen organizado transnacional, la corrupción y la gobernanza en América Latina, sino que también es un amigo de toda la vida y un estimado colega. Nuestra amistad, originada en experiencias compartidas de nuestra infancia en Bolivia, ha evolucionado durante décadas en una serie de colaboraciones profesionales. Recientemente, tuve el privilegio coescribir con él y Pablo Zeballos, un análisis detallado sobre el crimen organizado transnacional en la República Dominicana.

La notable amplitud del conocimiento de Douglas Farah abarca todo el hemisferio, profundamente nutrida por su extenso trabajo de campo, análisis incisivos y un acceso incomparable en América Central, la región andina y el Cono Sur. Su rigor investigativo y claridad analítica se manifiestan vívidamente en este estudio particular, que ofrece un examen esencial de las estructuras de gobernanza en el norte de Argentina. Específicamente, Farah investiga cómo gobiernos provinciales autoritarios profundamente arraigados han consolidado sistemáticamente su poder, a menudo entrelazándose con redes criminales locales y

transnacionales, influyendo así profundamente en el paisaje económico y político de Argentina.

Este documento ofrece un análisis exhaustivo de cuatro provincias—Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca—detallando las complejas dinámicas políticas, sociales y económicas que sustentan la gobernanza local de tipo caudillo. Farah destaca meticulosamente cómo estos líderes provinciales aprovechan la corrupción, la coerción, el clientelismo y el control sobre recursos esenciales para mantener su dominio, frecuentemente en detrimento de la transparencia, la gobernanza democrática y el bienestar público. El análisis también ilustra claramente cómo estas regiones se han convertido en nodos centrales en economías ilícitas más amplias, incluyendo tráfico de cocaína, contrabando, trata de personas y otras actividades criminales.

El trabajo de Douglas Farah no solo arroja luz sobre un área poco estudiada pero críticamente importante de la gobernanza, sino que también ejemplifica su excepcional capacidad para unir una rigurosa investigación de campo con un análisis geopolítico más amplio. Sus hallazgos subrayan la urgencia de reformas y mayor responsabilidad dentro de estas estructuras provinciales, brindando valiosas perspectivas para responsables de políticas, investigadores y defensores de la sociedad civil que trabajan para enfrentar los desafíos planteados por la corrupción, el crimen organizado y la gobernanza autoritaria en América Latina.

La investigación de Douglas Farah continúa siendo indispensable para académicos, periodistas, políticos y cualquier persona comprometida con comprender y enfrentar eficazmente los complejos desafíos de seguridad y gobernanza que moldean el panorama político de nuestro hemisferio

Introducción

Las Américas enfrentan hoy una serie creciente de desafíos al gobierno democrático y al estado de derecho. En todo el hemisferio, el aumento del autoritarismo y la debilidad de las instituciones se combinan para crear una compleja red de corrupción, impunidad y abusos de las normas democráticas. Los investigadores han estudiado estas tendencias autoritarias a nivel nacional y regional. Este estudio colaborativo, liderado por IBI Consultants en colaboración con Fidelem Security Advisers, examina estos desafíos a nivel subnacional en Argentina, donde predomina la autonomía provincial.

El análisis de las redes entrelazadas de gobiernos provinciales autónomos y semi-autónomos reveló que los gobernadores caudillos, que gobiernan las provincias como feudos personales, logran sobrevivir durante décadas gracias a relaciones transaccionales con el gobierno nacional. Incluso cuando hay choques externos al sistema, este persiste. Examinamos tres modelos de caudillos

consolidados y uno menos consolidado pero estratégicamente importante. Esperamos que esto amplíe la comprensión de la lucha continua por consolidar la democracia y el estado de derecho en la región.

IBI Consultants Contributors:
Douglas Farah, President
Pablo Zeballos, director,
Southern Cone
Kathryn Babineau, coordinator
Carolina Duque, data researcher

Ricardo Ferrer, independent
security consultant

Fidelem Security Advisors
Contributors:
Comisario Gen. (ret) Alejandro
Ñamandu, CEO
Emanuel Irazabal, researcher

Panorama general

La franja norte de la Argentina, que se extiende desde la frontera oriental con Paraguay, limita al norte con Bolivia y al oeste con Chile, constituye una región clave que contribuirá a definir el futuro económico de la nación. En ella se encuentran vastos yacimientos de litio, minas de oro, minerales estratégicos, tierras fértiles para la ganadería, bosques y un territorio vital que conecta importantes rutas fluviales y terrestres del continente. Además, es una pieza potencial de los corredores interoceánicos Pacífico-Atlántico que actualmente están en estudio.

Con múltiples fronteras internacionales porosas y gobiernos provinciales profundamente autoritarios que operan en gran medida al margen del control del gobierno federal y de las fuerzas del orden, esta región se ha convertido también en un núcleo creciente de economías ilícitas y cadenas de suministro ilegales en rápida expansión. Estas actividades están contribuyendo a definir el nuevo orden criminal del hemisferio. El área geográfica en cuestión se encuentra atravesada por algunas de las principales rutas terrestres y fluviales del continente utilizadas para el tráfico de cocaína en dirección norte-sur, así como por corredores clave del tráfico de personas, la migración irregular y el contrabando de miles de millones de dólares en cigarrillos y productos electrónicos.

Este estudio analiza el modelo de gobernanza del caudillo —o líder autoritario— que predomina en cuatro de estas provincias o estados: Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Todas, salvo Santiago del Estero, comparten fronteras internacionales de fácil permeabilidad.



Figura 1: Las provincias del norte con gobiernos "feudales" (IBI Consultants)

Como se analizará en detalle, estas provincias se cuentan entre las principales receptoras de subsidios federales en el país, condición que mantienen desde hace décadas. Sin embargo, todas —con excepción de Catamarca— figuran de manera constante entre las cinco provincias con mayores índices de pobreza, carencia de servicios sociales y mortalidad infantil.

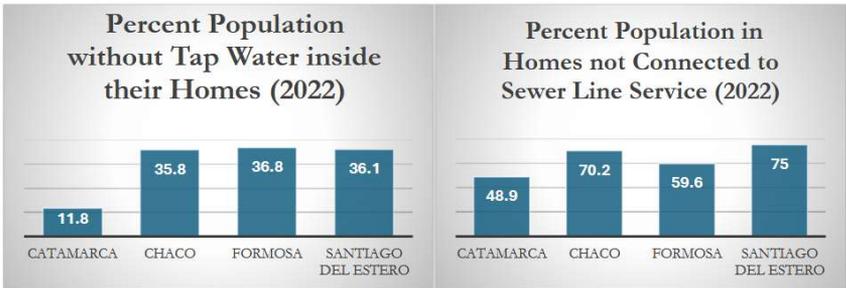


Figura 2: Indicadores de pobreza y falta de infraestructura: Viviendas sin agua corriente (izquierda) y viviendas sin servicio de alcantarillado (derecha). (Fuente: CENSO 2022. Instituto Nacional de Estadística y Censos)

Aunque cada provincia presenta diferencias, con idiosincrasias y variantes propias, comparten numerosas características que han permitido a líderes poderosos de estos territorios subnacionales perpetuarse en el poder durante décadas, dominando tanto la esfera política como la económica de las provincias, a menudo con vínculos con organizaciones criminales.

Cada una de estas provincias forma parte de lo que los académicos argentinos han denominado “la Argentina feudal”, un entramado en el que una sola persona o familia gobierna durante más de una década, amparada en “regímenes extractivos” que controlan los presupuestos estatales, utilizan los fondos públicos para recompensar a familiares y leales en sistemas clientelares, y crean condiciones electorales profundamente desiguales que dejan a la oposición con escasas posibilidades de triunfar.¹

Estos gobernadores han desarrollado en conjunto un conjunto común de estructuras coercitivas, represivas y corruptas para conservar el control en zonas que siguen siendo de las más aisladas del país. En cada una de estas provincias, las tasas de homicidio se acercan al promedio nacional relativamente bajo de Argentina, pero se recurre a otras formas de represión, dirigidas selectivamente contra grupos políticos y de la sociedad civil que se oponen al gobierno, buscando causar el máximo impacto psicológico.

Estas estructuras comunes incluyen:

- La preservación de la apariencia de gobernanza democrática, principalmente mediante procesos electorales estrictamente controlados y distorsionados, como se mencionará más adelante, al tiempo que se mantiene el control sobre todos los resortes del poder estatal;
- La creación de servicios de inteligencia provinciales y fuerzas policiales locales leales al gobierno, que son desplegadas contra opositores políticos;
- El control de autoridades judiciales subordinadas y de los tribunales, lo que garantiza la impunidad;
- El control de los medios de comunicación locales mediante la coacción y el dominio de los ingresos por publicidad en una región donde la empresa privada o el empleo fuera del Estado son casi inexistentes. La pauta oficial —los anuncios pagos del gobierno provincial— constituye la inmensa mayoría de los ingresos de los

medios, los cuales pueden ser, y de hecho son, silenciados con solo retirar esa fuente vital de financiación.

- Control económico mediante la creación de redes cerradas de alianzas con propietarios de bancos provinciales, contratistas de obras públicas y otros actores que dependen de contratos adjudicados por el Estado, lo que permite ejercer un férreo dominio sobre la economía local a través de la distribución discrecional de dichos contratos;
- Creación de una estructura de profunda dependencia de la población local respecto del gobierno provincial, tanto para el acceso a empleo como a servicios esenciales como salud, educación y jubilación, generando complejas redes de control económico, corrupción y clientelismo.

Estas estructuras se ven reforzadas por lazos políticos y económicos transaccionales, mutuamente beneficiosos y que se retroalimentan, entre los gobiernos provinciales y actores clave del gobierno central. Estos vínculos federales-provinciales de corrupción son transaccionales: se intensifican o debilitan según el resultado de las elecciones presidenciales, pero nunca se interrumpen del todo. Los intereses políticos y económicos entrelazados han protegido a los gobernadores caudillistas debido a su enorme utilidad en garantizar votos y control territorial para el partido gobernante.

Como señaló Sarah Chayes en su innovador estudio sobre la corrupción en Honduras —y cuya observación es plenamente aplicable a los casos aquí analizados—:

“[C]orrupción ya no puede entenderse simplemente como las acciones inmorales de individuos. Más bien, constituye el sistema operativo de redes sofisticadas que cruzan sectores y fronteras nacionales en su afán por maximizar las ganancias de sus miembros. La corrupción es el sistema operativo de redes complejas que vinculan al sector público con el privado y con criminales en toda regla —incluidos asesinos—, cuyo objetivo principal es maximizar los beneficios para los integrantes de la red. La corrupción está incorporada al funcionamiento de las instituciones de estos países. Y, al igual que las organizaciones criminales que recorren su tejido institucional, estas redes traspasan fronteras. Intercambian favores y establecen posiciones estratégicas con socios y proveedores de servicios en todo el mundo, por lo que sería más preciso denominarlas redes cleptocráticas transnacionales.”²

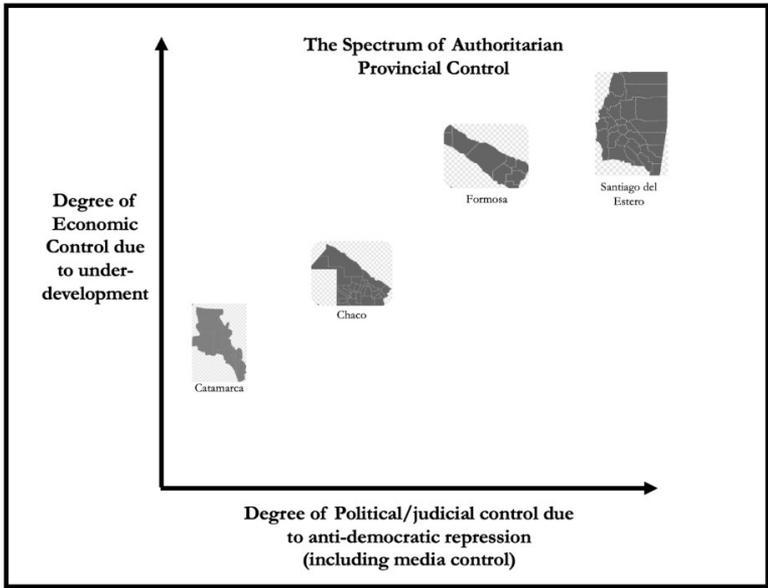


Figura 3: Espectro del control provincial autoritario (IBI Consultants)

Basamos nuestras conclusiones en visitas de campo realizadas a las provincias durante los últimos dos años, en informes de fuerzas de seguridad e inteligencia, en el análisis de datos nacionales y provinciales (cuando estuvieron disponibles), en entrevistas con expertos argentinos y regionales, así como en revisiones de literatura de fuentes abiertas. Este trabajo también se apoya en la labor de campo y el estudio realizados en 2023, centrados en la provincia de Santiago del Estero.³

La Argentina feudal y la cuarta ola del crimen organizado transnacional

Si bien los académicos argentinos han escrito extensamente sobre la gobernanza “feudal” en numerosas provincias, las estructuras de poder depredadoras, cerradas y entrelazadas, que han demostrado una sorprendente durabilidad y resiliencia durante las últimas tres décadas, constituyen hoy un componente central de lo que se conoce como la “cuarta ola” del crimen organizado transnacional en América Latina.⁴

Uno de los pilares de este análisis es que las rutas de tránsito de cocaína desde los países productores —Bolivia y Perú, en el caso de Argentina— hacia los puertos atlánticos de Buenos Aires y Montevideo (Uruguay), y desde allí a Europa, se han convertido en un circuito creciente y más lucrativo que los mercados tradicionales como Estados Unidos. Estas provincias desempeñan un papel clave en esa cadena de suministro.

La hidrovía Paraguay-Paraná, que se extiende a lo largo de 3.400 kilómetros (2.100 millas) y cuenta con al menos 150 puertos, es una ruta de tránsito crucial que conecta a cinco países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Hoy constituye la “vía principal para el envío de cantidades récord de cocaína a Europa”. Las incautaciones de cocaína en esta ruta se han quintuplicado entre 2010 y 2021.⁵ Entre las carreteras y ferrocarriles interoceánicos proyectados o

en fase inicial en el continente, al menos dos atravesarían esta región del noroeste argentino, lo que podría traer significativos beneficios económicos, pero también abrir nuevas rutas para el contrabando y el narcotráfico, eludiendo el paso por el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes.

Otro factor clave en el movimiento de la cocaína es la casi total ausencia de control del tráfico aéreo en el norte argentino, lo que ha dado lugar a una densa red de pistas clandestinas utilizadas por avionetas procedentes de Bolivia, Paraguay o Brasil, que descargan rápidamente o dejan caer la carga desde el aire volando a baja altura y velocidad.⁶

Uno de los elementos definatorios de la Cuarta Ola es la aparición de nuevos mercados ilícitos en los que actores criminales regionales y extrarregionales se insertan en múltiples actividades ilegales, desde el tráfico de cocaína hasta el contrabando de cigarrillos, la trata de personas o la comercialización ilegal de productos electrónicos.

Este nuevo corredor de cocaína hacia Europa, que fluye a través de fronteras porosas con siglos de tradición en el contrabando, ha atraído a una amplia gama de actores extrarregionales, incluidos grupos criminales organizados transnacionales provenientes de los Balcanes, Rusia y Asia.⁷



Figura 4: La hidrovía Paraguay-Paraná, que atraviesa las provincias de Formosa y Chaco en Argentina, es una fuente principal de tráfico de cocaína y otras economías ilícitas (Washington Post).

Estos desarrollos convierten a regiones más aisladas como estas provincias —cercanas a fronteras internacionales porosas, con escasa integración a la vida nacional y que controlan rutas ilícitas clave hacia puertos y centros urbanos densamente poblados— en algunas de las más valiosas del hemisferio. Su valor aumenta cuando dichas regiones ya poseen estructuras de control político y económico altamente centralizadas, en gran medida exentas de restricciones institucionales nacionales y sostenidas por la corrupción y la impunidad.⁸

¿Puede desmantelarse el modelo?

Aunque poco estudiados, comprender estos modelos autoritarios subnacionales es clave para descifrar cómo se socava el Estado de derecho y la gobernanza democrática; cómo China logra acceder con éxito a recursos vitales como el litio, eludiendo estándares nacionales y normas de transparencia; y cómo prosperan las redes criminales en entornos protegidos que contribuyen a transformar radicalmente el rostro de las economías ilícitas globales.

Cuando el outsider político Javier Milei ganó la presidencia de Argentina en noviembre de 2023, autodefiniéndose como anarcocapitalista, la primera prioridad en su agenda populista radical fue achicar y desmantelar el aparato estatal que la mayoría de los argentinos percibía como sobredimensionado, ineficiente y profundamente corrupto tras sucesivos gobiernos. En la campaña, utilizó frecuentemente una motosierra como símbolo de su promesa de “recortar” el tamaño del Estado.

Eso implicó recortar de forma inmediata y radical los fondos que tradicionalmente fluían del gobierno nacional hacia las provincias —fondos vitales para las economías de las cuatro provincias aquí analizadas—, lo cual hizo a través de acciones ejecutivas. Algunos analistas sostienen que, si bien el ajuste presupuestario puede ser necesario, también podría reforzar y criminalizar aún más a ciertos gobiernos provinciales, que desesperadamente buscarán nuevas fuentes

de recursos, al tiempo que se reduce aún más la capacidad de influencia del gobierno nacional.

Si bien aún no se ha definido el éxito del proyecto general de Milei, enfrenta un desafío que sus predecesores no han logrado superar durante más de tres décadas: la supervivencia de un núcleo de líderes políticos regionales profundamente antidemocráticos que gobiernan las provincias del norte como feudos personales, ubicados en el cruce del narcotráfico, la trata de personas y múltiples economías ilícitas, aferrándose al poder mediante la corrupción, la persecución política y el control económico.

El modelo

Argentina, como gran parte de América Latina, tiene una larga historia de caudillismo y dominación autoritaria militar tanto a nivel nacional como provincial, con figuras como Juan Perón (1946–1955; 1973–1974) y su esposa Evita⁹, así como las brutales juntas militares de la década de 1970, que gobernaron hasta el retorno a la democracia en 1983.¹⁰

Debido a que las provincias existían antes de que la Constitución argentina formara un Estado nacional unificado, los gobernadores conservan poderes inusualmente amplios, lo que significa que “casi todas las cuestiones importantes de política pública a nivel nacional en las últimas dos décadas han sido negociadas de algún modo entre el presidente y sus ministros (u operadores) y los gobernadores provinciales,

quienes posteriormente instruyen a los legisladores nacionales de sus provincias para que voten en consecuencia”.¹¹

En las provincias más autoritarias, prácticamente no existe separación de poderes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que significa que las fuerzas nacionales de seguridad e inteligencia tienen escasa o nula capacidad operativa, ya que sus contrapartes locales responden principalmente al gobernador. Las filtraciones de operaciones de seguridad son tan frecuentes que, cuando se lanzan operativos federales, suelen organizarse desde fuera de la zona objetivo para minimizar el riesgo de ser comprometidos.¹²

Según el marco legal argentino, los poderes provinciales incluyen:

- La facultad de dictar sus propias constituciones (incluidas las normas electorales);
- La autoridad sobre áreas vitales de política pública, como la educación y la salud, incluyendo la responsabilidad de ejecutar políticas públicas nacionales como los programas de asistencia social;¹³
- El control de los recursos naturales, no solo los superficiales, sino también los del subsuelo, incluyendo bienes estratégicos como el litio y los minerales de tierras raras. La soberanía minera otorga a los gobernadores provinciales la capacidad de

negociar contratos por estos recursos estratégicos a nivel subnacional —en lugar de nacional— y acceder a ingresos significativos que, en muchos casos, son opacos.

Quizá lo más importante sea que las provincias argentinas cuentan con capacidad normativa propia, reforzada por la cláusula de poderes residuales de la Constitución. Esta cláusula garantiza que las provincias conservan todas las competencias que no hayan sido expresamente delegadas al gobierno federal. Como jefes de los poderes ejecutivos provinciales, los gobernadores son las figuras políticas predominantes en las provincias.¹⁴

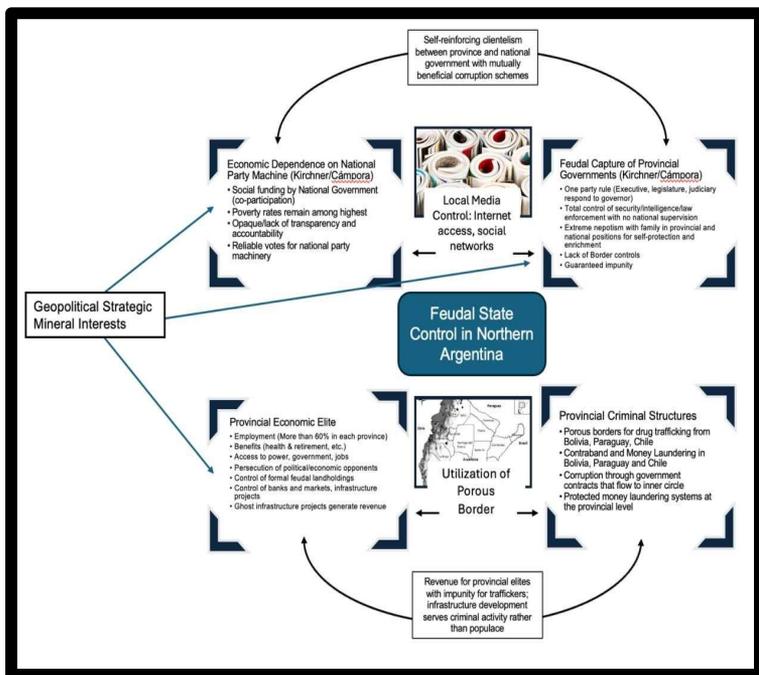


Figura 5: Redes interconectadas de gobernanza provincial y nacional autoritaria que empoderan el gobierno feudal (IBI Consultants)

Aunque la Constitución nacional argentina permite al gobierno federal “intervenir” o asumir temporalmente el control de un gobierno provincial en casos de deterioro extremo del orden social, esta disposición se ha aplicado una sola vez en el último siglo: en Santiago del Estero, en el año 2004, debido a “violaciones sistemáticas de los derechos humanos, atropello de los derechos de los ciudadanos de la República y persecución por parte de los servicios de inteligencia a la sociedad civil”.¹⁵ La intervención, que duró un año, puso fin al gobierno

caudillista de 20 años de Carlos Juárez, pero dio paso casi de inmediato al actual mandato —ya de más de dos décadas— del gobernador Gerardo Zamora.

Las variantes del modelo feudal que aquí analizamos han perdurado durante décadas bajo administraciones de diversa orientación ideológica. Aunque estos regímenes sufren rupturas ocasionales, tales rupturas no han derivado en reformas profundas ni sostenidas, como lo demuestra el caso de la intervención federal en Santiago del Estero. Tres asesinatos notables —uno reciente en Chaco y dos históricos, en Catamarca y Santiago del Estero— provocaron una reacción pública y cambios políticos que lograron derrocar a caudillos individuales, pero no dismantelaron el sistema en su conjunto.

La consolidación moderna del modelo caudillista se debe, en gran medida, al ascenso del Partido Peronista y su facción La C mpora, fundada por el expresidente N stor Kirchner (2003–2007) y su esposa, la expresidenta Cristina Fern ndez de Kirchner (2007–2015), quien tambi n ocup  el cargo de vicepresidenta (2019–2023). En la actualidad, La C mpora est  dirigida por el senador M ximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial.

Como analizaremos en detalle, el gobierno nacional —especialmente bajo las administraciones kirchneristas— distribuy  sumas federales desproporcionadas y abultadas a estas provincias, con el objetivo de sostener una

maquinaria partidaria provincial frecuentemente corrupta, que garantizaba mayorías aplastantes de votos para los candidatos presidenciales y legislativos de La C mpora.

Nuestra investigaci n durante la  ltima d cada ha documentado la corrupci n end mica de las administraciones kirchneristas, que alcanz  pr cticamente todos los aspectos del aparato estatal,¹⁶ incluyendo la negligencia extrema de Cristina Kirchner en la investigaci n del asesinato del fiscal Alberto Nisman en 2015. Nisman hab a vinculado a Ir n con el atentado terrorista de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires, y estaba a punto de revelar posibles v nculos entre el caso y la expresidenta Kirchner justo antes de su muerte.¹⁷ Nuestra investigaci n tambi n expone el papel de los gobiernos kirchneristas en el patrocinio de movimientos populistas radicales y autoritarios.¹⁸

Cuatro estudios de caso sobre caudillos del siglo XXI

En este contexto, no resulta sorprendente que las cuatro provincias que analizamos como estudios de caso de este modelo estén —o hayan estado hasta hace muy poco— gobernadas por fieles seguidores de Cristina Kirchner y líderes de su partido. Las cuatro provincias principales y sus respectivos líderes son:



Figura 6: La expresidenta y líder de La C mpora, Cristina Fern ndez de Kirchner, junto a los gobernadores Insfr n (izquierda), Capitanich (centro izquierda), y Zamora y su esposa Claudia (centro derecha). A la derecha, el gobernador Jalil con el expresidente y ac olito kirchnerista Alberto Fern ndez.

- Formosa, donde Gildo Insfr n gobierna de manera continua desde 1995.
- Chaco, donde Jorge Capitanich ejerci  tres mandatos como gobernador (2007–2015, 2019–2023), adem s de ocupar cargos ministeriales de alto rango en el gobierno kirchnerista. Perdi  su intento de reelecci n en 2023 tras investigaciones federales que vincularon a personas cercanas a  l con un asesinato de alto perfil.

- Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora y su esposa Claudia Ledesma Abdala gobiernan alternadamente desde 2005. La pareja se turna entre la gobernación y el Senado nacional para eludir las restricciones de reelección.
- Catamarca, donde Raúl Jalil, fiel al kirchnerismo, ocupa el cargo de gobernador desde 2019, tras suceder a otra dirigente kirchnerista, Lucía Corpacci (2011–2019), hoy senadora nacional. Aunque Catamarca difiere en ciertos aspectos del modelo autoritario típico, se incluye aquí debido a la continuidad kirchnerista por más de una década y a que forma parte del estratégico “triángulo del litio” que abarca zonas de Argentina, Chile y Bolivia.

Tres de las cuatro provincias analizadas comparten fronteras internacionales: Formosa y Chaco con Paraguay, Catamarca con Chile. Santiago del Estero, la única sin frontera exterior, cumple la función de centro logístico o depósito seguro para productos ilícitos que transitan por el norte del país, incluyendo cocaína, cigarrillos y precursores químicos.¹⁹ Catamarca, como ya se mencionó, posee yacimientos significativos de litio, y Formosa cuenta también con reservas más pequeñas — probablemente más costosas de extraer— pero importantes tanto desde el punto de vista económico como estratégico. Además, Formosa posee ciertos depósitos de petróleo.

La economía política del feudalismo

El académico Carlos Gervasoni, especialista en modelos feudales, sostiene que el sistema provincial argentino da lugar a lo que denomina el fenómeno del *campo de juego inclinado*, donde si bien hay elecciones, estas no son libres ni justas, ya que “el partido oficialista tiene ventajas que hacen imposible que pierda”. Gervasoni también destaca que no existe rendición de cuentas sobre las millonarias transferencias que realiza el gobierno nacional hacia las provincias.²⁰

Un estudio sobre el federalismo argentino realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó un patrón común: “las provincias se caracterizan típicamente por el dominio del poder ejecutivo, escasa competencia política y redes clientelares de poder”.²¹

El informe añade además: “Aunque el desarrollo económico no es un fuerte predictor de gobernanza democrática en las provincias argentinas, en las típicas provincias periféricas —donde la pobreza y la falta de educación son generalizadas entre la mayoría de la población— un solo líder (caudillo) o un clan familiar controla el juego político.”²²

La dinastía Kirchner impulsó la expansión de los mecanismos de transferencia de fondos desde el gobierno

nacional hacia las provincias,²³ lo cual se consolidó como una forma duradera de clientelismo, que fortaleció a los caudillos vinculados al ala peronista/kirchnerista de La C mpora. Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, recib  un porcentaje significativamente mayor de fondos discrecionales de lo que indicaba la f rmula de distribuci n, incluyendo un super vit del 442 % durante el primer mandato de Cristina Kirchner.²⁴

En 2008, en el apogeo del poder de La C mpora, sus aliados provinciales m s leales fueron enormemente beneficiados. El gobierno de Formosa recib  el 95 % de sus ingresos totales del gobierno nacional, mientras que Santiago del Estero y Chaco recibieron alrededor del 85 %, y Catamarca cerca del 70 %.²⁵ En Santiago del Estero, el rastreo del dinero es a n m s opaco, ya que uno de los bancos receptores de fondos pertenece parcialmente al principal operador financiero de la provincia, un actor que ha respaldado a los gobernadores desp ticos desde los a os 90 y que adem s es propietario del diario local, una constructora y otros intereses econ micos de peso.²⁶

Pese a este enorme flujo de recursos desde el gobierno central —muy superior en t rminos per c pita al de la mayor a de las provincias—, estas cuatro jurisdicciones figuran entre las seis con mayores  ndices de pobreza y pobreza extrema del pa s, seg n los escasos datos

disponibles. En cada una de ellas, la suma de ambos indicadores supera el 50 % de la población.

Este sistema de subsidios masivos se utiliza para recompensar la lealtad política provincial y castigar a quienes se mantienen al margen del sistema. Las recompensas suelen materializarse en pagos corruptos, incluso en prestaciones que teóricamente deberían estar destinadas a personas con discapacidad o incapacidad para trabajar, pero que en la práctica se desvían a los militantes del partido.

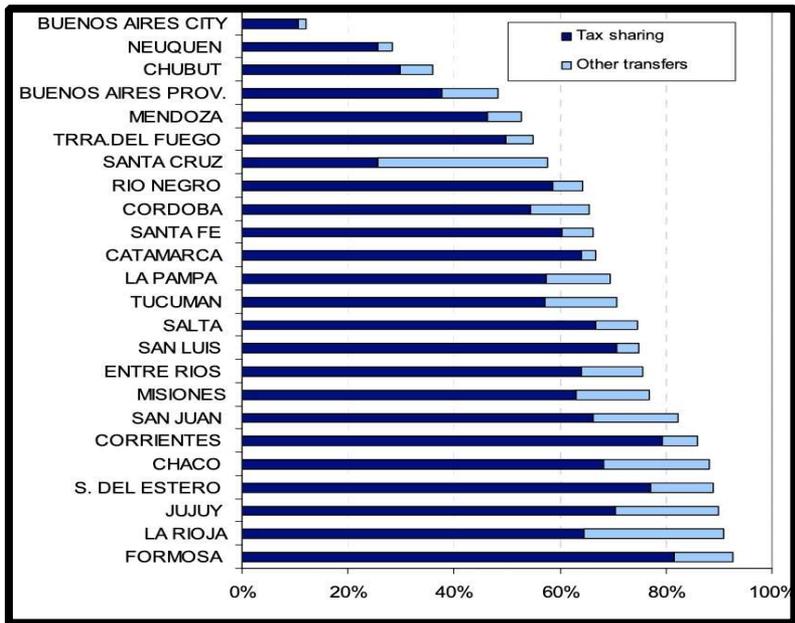


Figura 7: Transferencias federales a las provincias como porcentaje de los ingresos totales (2008) Fuente: BID

Uno de estos casos, apodado “Mega Fraude”, salió a la luz durante una investigación judicial federal en Chaco a comienzos de 2025. Los investigadores descubrieron que 700 de las 840 personas que recibían pensiones por discapacidad en una localidad no presentaban ninguna discapacidad. Cuando la auditoría se extendió a una localidad vecina en la provincia de Formosa, más de 1.000 personas renunciaron espontáneamente a sus pensiones por discapacidad, alegando haber sido “milagrosamente curadas”.²⁷

El control de estos recursos sin ningún tipo de rendición de cuentas genera una dinámica autorreforzante, en la que:

La mayoría de los gobiernos provinciales son unidades políticas sedientas de recursos, deseosas de obtener favores fiscales del gobierno nacional. A su vez, el gobierno federal necesita votos en el Congreso para implementar políticas económicas de alcance nacional, cooperación en las elecciones nacionales, así como buena voluntad general y cumplimiento por parte de los gobiernos provinciales. Esta situación crea incentivos para el intercambio de favores entre presidentes y gobernadores, mientras que el Congreso actúa meramente como “ratificador” de acuerdos negociados en otras arenas más informales.²⁸

Cada uno de estos factores de codependencia, mediante redes políticas y económicas corruptas que vinculan el poder subnacional con el nacional, conforma los eslabones

de una cadena de impunidad que une a los gobiernos provinciales con el crimen organizado transnacional, a la vez que facilita ataques a adversarios políticos y debilita gravemente a la sociedad civil. A continuación, examinaremos algunas de las consecuencias en las cuatro provincias estudiadas.

Formosa

Ninguna provincia ejemplifica de forma tan completa el funcionamiento del modelo caudillista como Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, un leal aliado del kirchnerismo. En la actualidad, Insfrán se encuentra enfrascado en un enfrentamiento judicial de alto perfil con la Corte Suprema de la Nación, la cual, en diciembre de 2024, dictaminó que la reforma de la constitución provincial realizada en 2003 para permitir la reelección indefinida era inconstitucional.

Insfrán, al rechazar el fallo, declaró que “ningún porteño” podía venir desde la capital, Buenos Aires, a dictar leyes en Formosa. Sus opositores lo compararon con el dictador venezolano Nicolás Maduro por sus acciones y solicitaron que el gobierno federal interviniera la administración de la provincia.²⁹



Figura 8: Mapa y estadísticas clave de la provincia de Formosa

La estructura de poder de Insfrán se basa en el control absoluto de las instituciones provinciales, en el nepotismo —al menos 15 familiares trabajan en el gobierno provincial, incluyendo dos hijas, un hermano y un yerno—, y en el férreo dominio de los recursos que fluyen desde el gobierno central. Estos recursos constituyen más del 90 % del presupuesto del gobierno provincial, y se estima que el 68 % de las personas empleadas en el mercado laboral

formal son trabajadores estatales, uno de los pocos sectores con acceso a cobertura de salud y beneficios jubilatorios.

Esta distribución económica tan desigual no se debe a que Formosa sea una provincia carente de recursos. Además de su actividad ganadera, forestal y petrolera, Formosa cuenta con yacimientos de litio que, aunque más pequeños y de difícil explotación en comparación con los de Catamarca, son económicamente significativos.³⁰

Debido a las facultades provinciales mencionadas anteriormente, es el gobierno de la provincia de Formosa —y no el Estado nacional argentino— quien controla la explotación de estos recursos, incluido el litio. Desde 2023, se encuentra en desarrollo una planta experimental de extracción, a cargo de firmas argentinas, chilenas y canadienses.

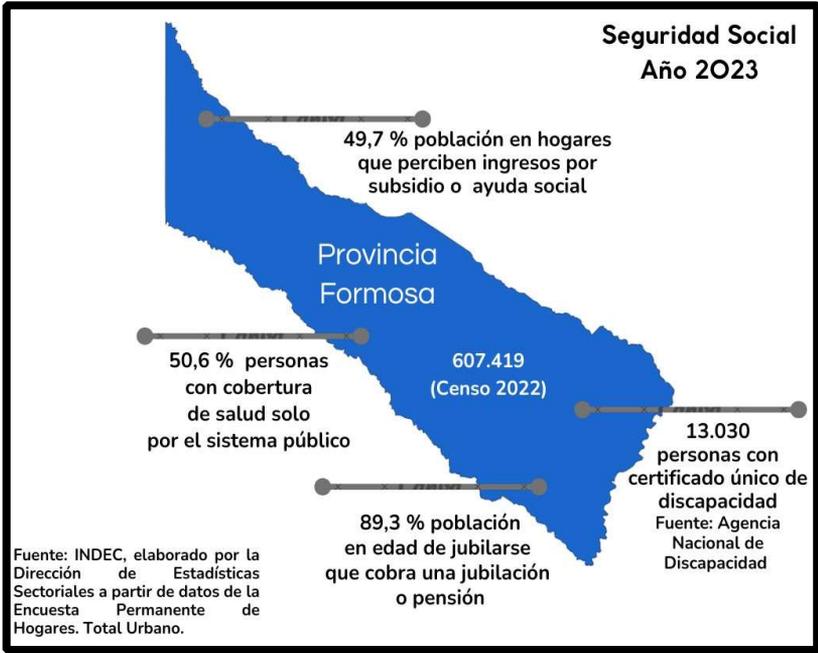


Figura 9: Gráfico del gobierno argentino que demuestra los altos niveles de pobreza en la provincia de Formosa, incluyendo una alta dependencia de los hogares en el apoyo estatal.

Como resultado del generoso flujo de recursos y su capacidad para distribuirlos a discreción, Insfrán ha asegurado elección tras elección para el Partido Justicialista, al cual él y los Kirchner pertenecen, al tiempo que envía senadores y diputados provinciales subordinados que ratifican la agenda kirchnerista a nivel nacional. Además del nepotismo endémico y la corrupción, Insfrán controla actualmente 20 de los 30 diputados de la legislatura provincial y ha “colonizado el sistema judicial”, garantizando la impunidad para él y su entorno.³¹

Esta estructura ha derivado en una provincia donde Insfrán es considerado el “dueño y patrón, un verdadero señor feudal que ha aniquilado todas las instituciones, controla los tres poderes del Estado, persigue a los pocos medios de comunicación que aún subsisten y no tolera la disidencia. Y posee una fortuna incalculable”.³²

A lo largo de las décadas, Insfrán ha tenido libertad total para designar jueces, fiscales, jefes policiales y agentes de inteligencia leales, lo que ha dado lugar a una situación en la que “el aparato de seguridad del Estado persigue a la oposición mientras el contrabando y el narcotráfico operan con total impunidad”.³³ Esto ha llevado a denuncias reiteradas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la provincia, incluyendo falta de debido proceso, vigilancia ilegal, apropiación de tierras, enjuiciamientos selectivos de opositores y otros abusos.³⁴

En un informe de 2009, Amnistía Internacional documentó la discriminación, exclusión y pobreza sistemáticas que sufren las poblaciones indígenas en Formosa, incluyendo la apropiación ilegal de sus tierras sin compensación alguna y el “quiebre de la voluntad colectiva de las comunidades mediante amenazas, cooptación de miembros, creación de asociaciones paralelas... y el uso de las firmas de autoridades como cheques en blanco”.³⁵

Bajo el gobierno de Insfrán, la frontera fluvial porosa con Paraguay, que cuenta con nueve pasos formales y decenas

de cruces informales, pasó de ser un eje tradicional de contrabando de cigarrillos, combustible y productos electrónicos a convertirse en una arteria mayor del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia los centros de acopio de Rosario y Buenos Aires.³⁶ Parte de ello se debe a que la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 81 atraviesan Formosa, ofreciendo un corredor de tránsito rápido hacia las provincias de Chaco y Salta, y desde allí hacia otros destinos.

Según informes policiales, las bandas de narcotraficantes operan de manera conjunta a ambos lados de la frontera, poseen tierras y empresas en ambas jurisdicciones y las economías ilícitas circulan con tal libertad que la frontera es prácticamente imaginaria. Se ha registrado un aumento marcado de otros delitos en la zona fronteriza de Formosa, incluyendo trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de menores, y trata de trabajadores rurales que son esclavizados para la cosecha de distintos cultivos en ambos países.³⁷

El narcotráfico en Formosa ha crecido tanto por la permisividad del gobierno provincial como por su ubicación geográfica privilegiada, con vías fluviales y áreas boscosas sin patrullaje. A pesar de múltiples denuncias por parte de opositores políticos sobre la presunta vinculación de familiares y allegados de Insfrán con el narcotráfico, nunca se han presentado cargos. Por ejemplo, en 2016, un camión perteneciente a una sobrina

de Insfrán fue interceptado transportando 2,5 toneladas de marihuana, pero no se impulsó ninguna causa penal.³⁸

La diputada nacional Mariana Zuvic (2019–2023) presentó públicamente múltiples casos en los que presuntamente Insfrán y miembros de su familia estarían involucrados en el tráfico de drogas sintéticas, cocaína y otras sustancias ilegales, denunciando que Formosa es el epicentro del narcotráfico en Argentina. Zuvic calificó a la provincia como “una cárcel con 500.000 presos”, debido a las continuas violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho bajo el gobierno de Insfrán.³⁹

Se ha reportado ampliamente que Insfrán controla directamente bandas armadas a ambos lados de la frontera para ejecutar diversas “tareas”. Un incidente ocurrido en octubre de 2024, ampliamente cubierto por la prensa local, parece haberlo confirmado. Atilio Basualdo, intendente de la localidad formoseña de Las Lomitas y crítico frontal de Insfrán, cruzó la frontera a Paraguay con su familia al notar que era seguido por dos hombres armados en motocicleta.

Alarmado, Basualdo entró en un centro comercial y pidió ayuda al personal de seguridad, quienes llamaron a la policía. Los agentes detuvieron a los dos sujetos y descubrieron que eran policías de Formosa, con credenciales oficiales y conduciendo un vehículo registrado a nombre de la fuerza provincial.

“No estaban allí solo para hacer inteligencia sobre mis movimientos”, dijo Basualdo a los medios locales.

“Eran sicarios. Estoy seguro de que su tarea era matarme”, afirmó, atribuyendo el atentado a sus enfrentamientos con el gobernador.⁴⁰

Un análisis de las fuerzas de seguridad concluye que Formosa representa:

“Un régimen feudal en el siglo XXI: un poder político hegemónico que influye o captura al resto de los poderes del Estado, generando una confusión entre los intereses de la Nación y los intereses personales o familiares del gobernador.”

“En el terreno, esto crea condiciones ideales para el crimen organizado, ya sea por acción (colusión) u omisión (zonas liberadas). La convergencia del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la corrupción, bajo el paraguas protector de un poder político monolítico, ha dado lugar al ‘reino del mal’ en Formosa. La consecuencia es una población rehén de dos flagelos: por un lado, la ausencia total de alternancia política, y por otro, la inseguridad generada por delitos que son respaldados o ignorados por las mismas instituciones que deberían combatirlos.”⁴¹

Chaco



Figura 10: Mapa de la provincia de Chaco y estadísticas clave

La provincia del Chaco comparte muchas de las características estructurales del modelo caudillista observado en Formosa, con estructuras económicas, políticas y sociales altamente autoritarias, personalistas y

duraderas, que benefician a un pequeño grupo vinculado al poder kirchnerista.

Sin embargo, a diferencia de Formosa bajo el mando de Insfrán, la estructura de poder en Chaco ha experimentado una ruptura, que —aunque quizás solo temporalmente— removió del poder a los leales a La C mpora y al kirchnerismo, representados por el hist rico l der provincial Jorge Capitanich. Aunque Capitanich no mantuvo el poder formal de forma ininterrumpida como Insfr n, domin  la vida pol tica de la provincia durante m s de dos d cadas. En cada uno de sus cargos, enfrent  y sobrevivi  m ltiples denuncias por corrupci n y abuso de poder.

No obstante, el asesinato en 2023 de una joven prominente, casada con un miembro de una familia vinculada al c rculo  ntimo de Capitanich, desat  una ola de protestas en la provincia a solo dos semanas de las elecciones. La investigaci n policial vincul  a siete colaboradores cercanos de Capitanich con el crimen, y todos ellos fueron procesados judicialmente. Capitanich, quien neg  conocer cualquier detalle del asesinato, perdi  por estrecho margen su intento de reelecci n.⁴²

La investigaci n de ese homicidio puso al descubierto las redes entrelazadas de corrupci n judicial y policial que casi siempre garantizan la impunidad, pero tambi n demostr  que, en circunstancias extraordinarias de

reacción pública masiva, esa impunidad puede, al menos momentáneamente, ser quebrada.

Es importante señalar que el Chaco también cumple un papel clave en las redes regionales de tráfico de cocaína, actuando como punto de tránsito fundamental para el traslado de cocaína desde Bolivia y Paraguay. Dados el control absoluto de las fuerzas policiales, de inteligencia y del sistema judicial provincial, investigadores policiales afirman que es prácticamente imposible que estas economías ilícitas operen sin protección oficial.

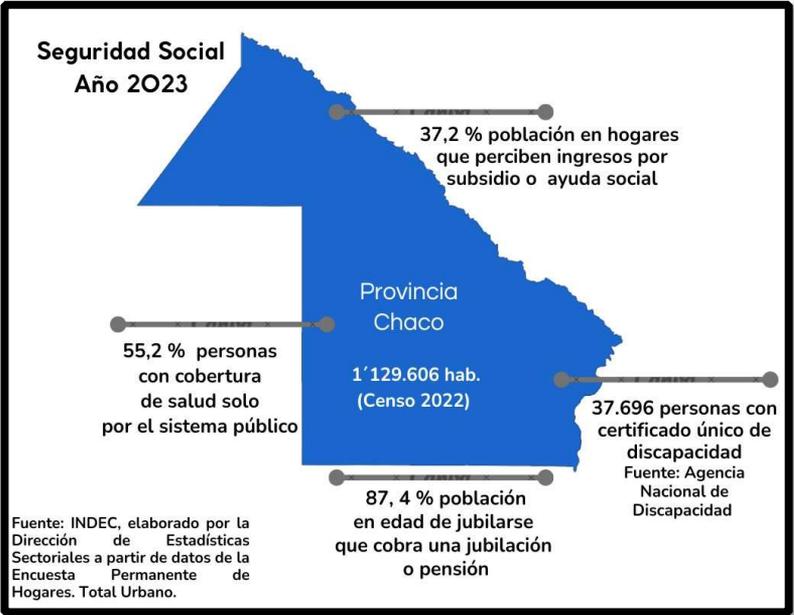


Figura 11: Gráfico del gobierno argentino que demuestra altos niveles de pobreza en la provincia del Chaco, incluyendo una alta dependencia de los hogares en el apoyo estatal.

El clima de negocios en Chaco está dominado por la producción minera, forestal y agrícola, que representa la gran mayoría de la actividad económica dentro de la provincia. La región es conocida por su producción de maíz y sorgo, así como de soja y otros cultivos comerciales de cereales. Estos productos se transportan a través del sistema de barcazas fluviales que constituye la columna vertebral de la infraestructura de transporte de la región.

“Cada uno de los departamentos produjo entre 72 y 80 mil toneladas. La producción de oleaginosas de Chaco se transporta a través del sistema de ríos Paraná-Paraguay hasta el polo industrial de Rosario para ser procesada y/o exportada. Los principales puertos de Chaco son Barranqueras y Vilelas (gestionados por la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA). En 2017, estos puertos despacharon más de medio millón de toneladas de granos (soja, maíz y trigo), estableciendo un nuevo récord. En 2017, las barcazas transportaron casi 506 mil toneladas de granos, un aumento interanual del 25,7%. Si se compara con los registros de 2015, la cantidad de fletes de granos por vía acuática originados en Chaco aumentó un 76,6%.”

Curiosamente, varios de los puertos utilizados por los productores y exportadores agroindustriales de la provincia, cuya actividad ha crecido exponencialmente en volumen en los últimos años, son de propiedad y gestión privada. Estas empresas han estado bajo el escrutinio de fiscales federales; en agosto de 2024, un juez federal detuvo la deforestación en la provincia, una preocupación

creciente, mientras los fiscales investigan un presunto esquema de corrupción público-privada en el que empresarios y funcionarios locales “lucran con la tala ilegal de tierras.”

De hecho, a medida que la deforestación del segundo bosque más grande de Sudamérica se intensifica para dar paso a las industrias agrícolas a gran escala de Chaco en la última década, la región ha sido objeto de atención por parte de organizaciones internacionales que buscan preservar la biodiversidad y limitar la deforestación. Desde 2005, el número de productores a pequeña escala ha disminuido drásticamente en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, generando preocupaciones internacionales sobre las implicaciones para los esfuerzos de conservación.

Además de una pequeña frontera fluvial con Paraguay, Chaco es atravesado por dos importantes “autopistas de la cocaína” que la policía ha identificado como rutas principales de tránsito no solo para la cocaína, sino también para armas, trata de personas y contrabando.

Además de las rutas terrestres y fluviales, un informe señaló: “La existencia de numerosas pistas de aterrizaje clandestinas en la provincia utilizadas para el contrabando de cocaína hacia Argentina sugiere que redes de narcotráfico bien financiadas operan en la provincia.”

Las principales rutas terrestres son: la Ruta Nacional 11, que conecta el cruce fronterizo de Clorinda

(Formosa/Paraguay) con la capital de Chaco, Resistencia, y luego hacia el sur hasta la ciudad de Rosario, el centro de tráfico de drogas de Argentina; y la Ruta Nacional 16, que conecta la provincia de Salta —que comparte frontera con Bolivia— con Santiago del Estero, Chaco y continúa hacia la provincia de Corrientes.

“En resumen, Chaco es un eslabón clave en la cadena nacional de narcotráfico,” afirmó un informe policial. “Recibe drogas de provincias fronterizas vecinas como Formosa y Salta, se utiliza para almacenar, dividir y redistribuir hacia otras partes del país.”

Hasta que una serie inesperada de eventos le costó la gobernación a Capitanich, él fue el centro de la vida política y económica de Chaco, donde empleó una estrategia de “alternancia planificada,” dado que la constitución local solo permite a un gobernador servir dos mandatos consecutivos a la vez. Esto le permitió dominar su provincia natal y convertirse en una parte visible e influyente de la estructura del partido nacional de Kirchner.

Capitanich fue gobernador de Chaco de 2007 a 2013, luego rotó para desempeñarse como jefe de gabinete de la entonces presidenta Kirchner (2013-2015), donde estuvo en el centro de múltiples escándalos de corrupción. De regreso en Chaco, fue intendente de la capital provincial, Resistencia, de 2015 a 2019, gobernando por medio de su elegido a dedo, el gobernador Domingo Peppo. Volvió a ganar la gobernación, sirviendo de 2019 a 2023.

A diferencia de lo ocurrido en Formosa, la maquinaria de Capitanich en Chaco, aunque concentró el poder en la legislatura unicameral y los tribunales, no modificó la constitución. En cambio, creó y respaldó una extensa red de movimientos sociales, fundaciones, oficinas de empleo y grupos de protesta organizados (piqueteros) que controlaba mediante el nepotismo y la distribución de fondos asignados por el gobierno nacional.

La corrupción masiva resultante, como se evidenció en esquemas como el caso del Mega Fraude, mostró que muchas de estas instituciones habrían estado involucradas en el desvío de millones de dólares. En ese caso, cuatro líderes con estrechos vínculos con Capitanich fueron arrestados por fraude y malversación. En otro caso federal, un cercano asociado de Capitanich, líder de uno de sus movimientos sociales, fue detenido después de ser grabado contando montones de dinero recibidos como parte de un esquema de malversación, para luego entregárselo a sus dos hijos preadolescentes para que lo escondieran.

Como señaló un analista policial de alto rango, “gran parte del dinero supuestamente destinado a programas y proyectos sociales terminó como propiedad personal, incluyendo vehículos nuevos como camionetas y motocicletas, además de ganado y efectivo, en manos de personas que no declaraban ingresos.”

Sin embargo, esa maquinaria política dirigida por Capitanich está ahora bajo asedio.

El 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski, de 28 años, esposa e nuera de importantes lugartenientes de Capitanich, ingresó a la casa de sus suegros en Resistencia, la capital de Chaco, y nunca más fue vista con vida.

El crimen, inmediatamente clasificado como femicidio, provocó un terremoto político en Chaco porque el esposo de Strzyzowski (César Sena), su suegro (Emerenciano Sena) y su suegra (Marcela Acuña) eran miembros de una fundación multimillonaria financiada por la maquinaria política de Capitanich.

Emerenciano y César Sena, junto con Acuña, eran líderes destacados del movimiento piquetero de Capitanich, frecuentemente acusados de corrupción e intimidación política. Capitanich fue el padrino de boda de Emerenciano y Marcela. En el momento del asesinato, Emerenciano era candidato al congreso provincial y Marcela aspiraba a la alcaldía de Resistencia, ambos como parte del bloque político de Capitanich y con su respaldo financiero.

La familia Sena “construyó su imperio gracias a su padrino Capitanich,” afirmó un investigador policial. Siete personas, incluyendo a César, Emerenciano y Marcela, están ahora bajo arresto y acusadas de complicidad en el homicidio. El cuerpo no ha sido encontrado.

Una posible explicación para la imposibilidad de hallar el cadáver, según los investigadores policiales, es que Emerenciano frecuentemente decía, a oídos de líderes

políticos de la maquinaria de Capitanich, que “cualquiera que nos moleste terminará con los cerdos,” una macabra alusión a hacer desaparecer cuerpos alimentándolos a los cerdos.

El asesinato, ocurrido dos semanas antes de las elecciones a gobernador, desató una serie de marchas y protestas masivas y puso a Chaco y a Capitanich en el centro de la atención nacional. La madre de Cecilia emprendió una campaña incansable por justicia, denunciando públicamente y con frecuencia a las autoridades provinciales por demorar el caso y exigiendo que se transfiriera a la justicia federal. Esto no ha ocurrido, pero con la derrota electoral de Capitanich y la atención sostenida de los medios nacionales, el caso ha avanzado lentamente.

“Aunque el caso ha progresado, existe el temor de que el muro de impunidad impida que avance,” dijo un investigador de alto rango. “Si Emerenciano cae, ¿arrastrará a la policía, jueces, fiscales y políticos con él? ¿Caerá el feudo?” Ya hay fisuras. Tanto Emerenciano como Marcela, originalmente acusados de homicidio agravado, han visto sus cargos reducidos a complicidad en el asesinato. Todas las demás acusaciones están en apelación en una tierra donde pocos cercanos al poder podrían querer encontrar la verdad.

“Chaco tiene diferentes facetas del crimen organizado conectadas al poder político, desde la violencia política hasta la corrupción estructural y la penetración narco en

las fuerzas de seguridad,” señaló un análisis policial. “Cada uno de estos fenómenos ha contado con algún grado de participación, protección o silencio cómplice de las autoridades políticas y judiciales. La derrota electoral de Capitanich sugiere que la sociedad de Chaco castigó esa coexistencia, pero el proceso de desentrañar todas las cajas negras y secretos feudales apenas comienza, y las instituciones deben fortalecerse enormemente para evitar que la historia se repita.”

Chaco también es objeto de exploración de litio: aunque no está claro cuánto litio alberga realmente la región, la exploración está en marcha, aparentemente liderada por una empresa paraguayo-canadiense, Chaco Minerals. Estudios iniciales de geólogos indican que la región podría contener vastas reservas.

Aunque la financiación del proyecto proviene principalmente de empresas canadienses, la mayoría de los líderes son paraguayos y parecen tener vínculos muy estrechos con el gobierno paraguayo. Un general paraguayo y secretario permanente del Consejo Nacional de Defensa de Paraguay, Máximo Díaz Cáceres, forma parte de la junta directiva de la empresa.

Díaz Cáceres apareció recientemente en los medios paraguayos por una demanda que presentó contra el principal periódico nacional, La Clave, cuya investigación

sugirió que Díaz Cáceres dirigía un esquema corrupto durante la pandemia, cobrando a quienes deseaban cruzar la frontera paraguaya ilegalmente. Perdió su demanda por difamación.⁵⁹

Santiago del Estero⁶⁰

Santiago del Estero, al igual que Formosa y Chaco, está firmemente controlada por una sola familia de lealtad inquebrantable a Kirchner y su movimiento La C mpora: el actual gobernador Gerardo Zamora y su esposa Claudia Ledesma Abdala. Juntos han gobernado la provincia con mano de hierro desde 2005. Kirchner eligi  personalmente a Ledesma —ahora senadora nacional— para ejercer como presidenta interina en 2020 durante varios d as, cuando tanto la vicepresidenta como el presidente estaban fuera del pa s.⁶¹

Debido a los l mites de mandato en la gobernaci n, la pareja rota entre presidir la provincia como un feudo donde la palabra del gobernador es ley, y ocupar una banca en el Senado nacional, liderando la agenda de Kirchner. Controlan la legislatura unicameral provincial, una estructura de inteligencia entrenada en el extranjero, la fuerza policial local —frecuentemente desplegada para proteger propiedades y negocios familiares— y las estructuras financieras locales.

Zamora y Ledesma llegaron al poder tras el gobierno de mano dura de otra pareja de caudillos de larga data, Carlos J arez y su esposa Nina Aragon s de J arez, quienes controlaron la provincia durante casi cinco d cadas. El r gimen provincial cay  en 2003 cuando el gobierno

federal asumió la administración de la provincia tras protestas masivas, disturbios civiles y atención nacional en torno a un doble homicidio conocido como La Dársena.

Aunque esa intervención sacudió el modelo de larga data, Zamora ganó las elecciones subsiguientes en 2005 y él y Ledesma han replicado el modelo, sin ceder nunca el poder desde la primera victoria electoral. Esto es una clara indicación de que, aunque el liderazgo puede eventualmente ir demasiado lejos como para ser aceptado por la población, el modelo puede perdurar.

Aunque todos los gobernadores feudales buscan controlar los medios locales, la estructura de Zamora ha sido particularmente agresiva en silenciar a los medios que han investigado o informado sobre su imperio. El éxito de Zamora y Ledesma es posible porque el gobierno provincial no solo gasta fuertemente en publicidad y anuncios, sino que también mantiene una gran maquinaria de relaciones públicas que produce constantemente historias positivas sobre las acciones del gobierno. Esto ha creado lo que un informe policial describió como “la esfera de silencio de Zamora” en la provincia.⁶²

Entre los elementos que esta maquinaria de propaganda promueve están las inexplicables y ostentosas demostraciones de riqueza por parte de las administraciones de Zamora y Ledesma, a pesar de contar con una base tributaria casi inexistente, escasos empleos

fuera del ámbito estatal, y una de las tasas de homicidio más altas del país.⁶³

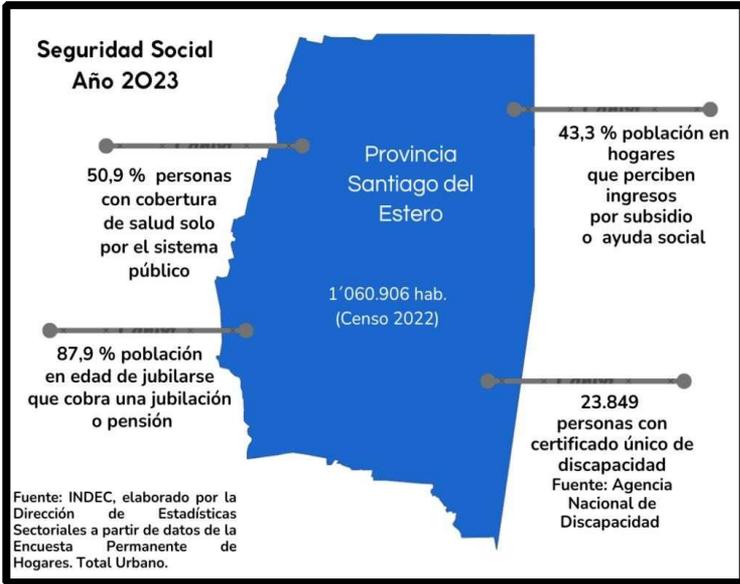


Figura 12: Gráfico del gobierno argentino que demuestra los altos niveles de pobreza en la provincia de Santiago del Estero, incluyendo los elevados niveles de dependencia de los hogares en el apoyo estatal.

La provincia tiene las tasas más altas de pobreza y pobreza extrema del país.⁶⁴ A pesar de ello, presume de contar con un aeropuerto internacional moderno, que opera pocos vuelos; un estadio de fútbol de nivel mundial, con pocos equipos que lo utilicen; una nueva pista para autos de carrera, con escasos vehículos que compitan; un campo de golf, con apenas un puñado de golfistas; un centro cultural de última generación; y una imponente estatua dorada del

astro del fútbol argentino Diego Maradona, que se dice es la más grande del mundo. La estatua fue inaugurada en 2021 bajo la mirada de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, junto con el resto de la selección argentina.

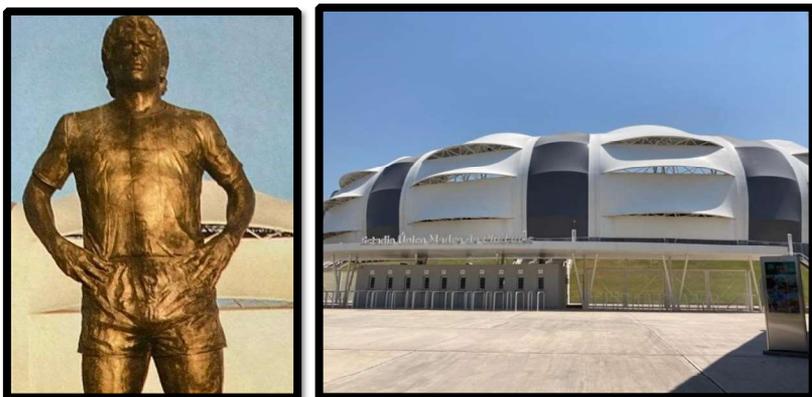


Figura 13: Estatua dorada del astro del fútbol argentino Diego Maradona (izquierda), y el Estadio Único de fútbol en Santiago del Estero. (Fotos, IBI Consultants)

Las investigaciones policiales, los informes de inteligencia regional y nacional, los testimonios de residentes locales y las investigaciones periodísticas señalan la causa de estas profundas contradicciones: Santiago del Estero es el epicentro donde convergen múltiples redes de crimen y corrupción, que involucran al gobernador, a su familia, a la familia de su esposa y a la poderosa maquinaria política nacional de La Cábpora/Kirchner.

“Zamora, Ledesma y Kirchner son un triángulo de hierro de poder en una tierra donde el tiempo se ha detenido”, dijo una fuente de inteligencia civil. “Es realmente un sistema feudal, donde el caudillo dirige su finca y entrega músculo político al gobierno central, y a cambio se le da vía libre para robar lo que quiera. Cada interés protege al otro, y hasta ahora el control ha sido inquebrantable”.⁶⁵

Este triángulo de hierro es fundamental para comprender el modelo caudillista de Zamora/Ledesma en esta provincia, sus redes ilícitas y cómo se desarrollan los centros de convergencia de múltiples actividades criminales transnacionales a través del autoritarismo político y la corrupción protegida tanto a nivel regional como nacional.

Parte de la razón se debe a que Santiago del Estero se encuentra sobre la Ruta 34, una de las arterias de cocaína más importantes de América del Sur. Esta carretera cruza desde la frontera sur de Bolivia hacia el corazón de Argentina, intersectando con rutas que transportan productos ilícitos hacia el sur y el este, a los puertos del Atlántico, y hacia el oeste, a la costa del Pacífico en Chile.⁶⁶

En marzo de 2025, fuerzas de policía federal —en una de las pocas operaciones antidrogas llevadas a cabo en la provincia— encontraron más de 150 kilos de cocaína en camiones bananeros que transitaban por la Ruta 34. Los ladrillos de cocaína estaban escondidos entre toneladas de bananas con destino a la costa atlántica.⁶⁷

En 2017, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad —quien ocupó el mismo cargo entre 2015 y 2019—, coordinó uno de los mayores decomisos de cocaína en la historia argentina en Santiago del Estero. Lo hizo evadiendo a las autoridades locales para capturar 1.800 kilos que llegaban por vía aérea desde Paraguay.⁶⁸

Aunque la provincia no tiene fronteras internacionales, se ubica en el centro de provincias que sí las tienen, como Formosa, Chaco y Catamarca, lo que la convierte en un sitio ideal para almacenar productos de organizaciones criminales transnacionales que operan a través de múltiples economías ilícitas y que necesitan protección y servicios para llevar sus productos al mercado.

A medida que la red global de distribución de cocaína ha cambiado en los últimos años —desplazándose del norte de Sudamérica hacia el Cono Sur—, con una mayor producción en Perú y Bolivia abasteciendo de cocaína al sur, atravesando Argentina, Paraguay y Uruguay hacia mercados europeos más lucrativos, Santiago del Estero se ha convertido en un punto clave en el nuevo mapa del comercio global de cocaína.⁶⁹

Cientos de caminos secundarios cruzan la región, sirviendo como pistas de aterrizaje para pequeñas aeronaves que transportan droga desde Bolivia y Perú, y que luego son insertadas en la red regional de distribución. A menudo, las aeronaves arrojan su carga mientras vuelan a baja altitud, antes de que trabajadores del cartel locales recojan los paquetes de cocaína para cargarlos en camiones que los

llevan a diferentes centros de almacenamiento. Como tituló un diario importante argentino: “Lluvia de cocaína en Santiago del Estero”.⁷⁰

Los radares en la frontera sur de Bolivia, al norte de Santiago del Estero, se supone que son la primera línea de defensa contra estas aeronaves, pero funcionan solo de forma intermitente. La policía local debería incautar las aeronaves al aterrizar o interceptar los cargamentos arrojados en zonas rurales.

“Los radares fronterizos solo funcionan unas pocas horas al día, y la policía tiene órdenes de no moverse cuando se observa una aeronave soltando paquetes blancos desde el aire”, dijo un oficial de inteligencia civil que sirvió en la zona durante varios años. “Si los radares están encendidos, convenientemente apuntan en dirección contraria a la que vienen los aviones. Si alguien captura un cargamento, es un competidor del cartel que lo arrojó, no una acción policial”.

La provincia también es un nodo clave en la ruta del contrabando de vehículos y mercancías, que durante décadas ha traficado productos desde el puerto de Iquique, en el norte de Chile, hacia Bolivia, Paraguay y más allá. Los grandes camiones cargados con vehículos más pequeños son apodados “camiones mosquito” porque invaden las rutas al anochecer, generalmente transportando autos robados o importados desde Asia, Estados Unidos y Europa, que luego son revendidos en el floreciente negocio

de autos usados, a menudo ligado a actividades de lavado de dinero.

Proyectos opacos vinculados al creciente comercio global de litio

Quizás el proyecto más ambicioso hasta la fecha sea el recientemente anunciado emprendimiento conjunto de baterías de litio, respaldado por empresas estatales argentinas en asociación con empresas estatales chinas. El norte de Argentina, Bolivia y Chile albergan conjuntamente algunos de los mayores yacimientos de litio del mundo, incluyendo regiones adyacentes a Santiago del Estero.

La demanda global de litio está en auge, al igual que el precio del mineral. El proyecto está gestionado por el “Consortio de Cooperación para la Fabricación de Celdas y Baterías de Iones de Litio”, y fue anunciado como la fábrica más grande de su tipo en América Latina. El litio es un recurso vital para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, computadoras y una gran variedad de productos necesarios para impulsar la revolución ecológica mundial y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Como es habitual, establecer el rol de las empresas de la República Popular China a través de búsquedas en registros públicos es difícil, ya que a menudo no cumplen

con los requisitos de divulgación obligatoria, como es el caso de las compañías mencionadas en este proyecto. Esta opacidad se ve agravada por el hecho de que la administración provincial de Zamora, una de las menos transparentes del país, puede negociar directamente con las empresas inversoras, lo que implica que la verdadera estructura de propiedad, los contratos y los pagos probablemente se mantendrán en secreto.

Abusos que atraen la atención de organismos internacionales de derechos humanos

Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales provinciales y otros grupos vinculados al binomio Zamora/Ledesma también constituyen un problema crónico, aunque no existe registro alguno de que un funcionario estatal haya sido arrestado, juzgado o condenado por alguno de los ataques denunciados.

En abril de 2022, una coalición de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil envió una denuncia formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), alegando que la “débil institucionalidad” de Santiago del Estero derivó en:

torturas y muertes a manos de oficiales de policía, hostigamiento político, arrestos arbitrarios de

manifestantes, amenazas a familiares, y colusión entre jueces y fiscales. Estas violaciones han sido dirigidas por el gobierno provincial de Santiago del Estero, incluyendo a funcionarios policiales, políticos y judiciales, con el objetivo de silenciar voces disidentes, proteger a personas vinculadas al poder, amenazar a las víctimas y encubrir redes criminales ligadas a funcionarios públicos y sus familias.⁷¹

Otro tema clave relacionado con los abusos a los derechos humanos son las múltiples acusaciones contra la familia Zamora-Ledesma por usar un poder judicial sumiso para apropiarse de decenas de miles de hectáreas de tierras para beneficio personal. Para lograrlo, primero pagan a comunidades indígenas empobrecidas para que ocupen grandes extensiones de tierra, y luego expropián formalmente esas tierras supuestamente en nombre de las comunidades.

Según entrevistas realizadas en 2022 con residentes, oficiales de seguridad y funcionarios de inteligencia nacional, en este proceso las comunidades indígenas suelen terminar recibiendo menos de la mitad de la tierra expropiada, mientras que la familia Zamora-Ledesma retiene el resto o lo vende a precios elevadísimos. Las tierras en disputa suelen ser zonas estratégicas atravesadas por múltiples rutas del narcotráfico que cruzan la provincia.

El movimiento campesino más activo en la región, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que con frecuencia participa en ocupaciones y tomas informales de tierras, está estrechamente alineado con Kirchner y la maquinaria política de Zamora-Ledesma. Este apoyo es público, y el grupo ha hecho campaña abiertamente por los tres como parte de las boletas electorales. Estas vinculaciones hacen que obtener fallos judiciales independientes en disputas de tierras — especialmente aquellas que afectan los intereses del kirchnerismo o del clan Zamora-Ledesma— sea casi imposible.



Figura 14: Carteles del MOCASE apoyando a Kirchner (tomados de X)

En octubre de 2024, el Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, denunció una serie de usurpaciones de tierras y medidas represivas por parte del

gobierno provincial de Santiago del Estero, señalando que los incidentes fueron informados a las autoridades judiciales, y que el sistema judicial, mediante su inacción y actos de omisión, “se ha desviado de la búsqueda de la verdad y ha cometido una injusticia contra un ciudadano con escasos recursos o educación”.⁷²

Las usurpaciones de tierras son un conflicto de larga data. Patricia Bullrich, durante su primer mandato como ministra de Seguridad, declaró que le pidió a Zamora “ocho millones de veces” que detuviera las tomas de tierras, y que cada vez Zamora prometía actuar, pero nunca hacía nada. “Es la ley de la selva en Santiago del Estero”, dijo Bullrich, en referencia al control de Zamora sobre los jueces y a la serie de fallos judiciales inverosímiles dirigidos contra simpatizantes de sus oponentes políticos. También afirmó que “no puede haber ni un solo rincón del país donde no se respete el Estado de derecho”.⁷³

Poco indica que el control de Zamora y Ledesma sobre el poder esté debilitándose, a pesar de que ahora enfrentan a un gobierno nacional hostil liderado por Milei, que ha recortado la financiación federal, pero no ha logrado establecer mayor rendición de cuentas ni transparencia en la provincia.

A menos que ocurra un shock político al sistema como el de La Dársena, señaló un analista, “la tríada de corrupción, cooptación institucional y crimen organizado seguirá operando con una alarmante normalidad en la provincia”.⁷⁴

Catamarca

Desde 2011, el gobernador de Catamarca ha sido un leal al kirchnerismo, pero la provincia representa una adaptación menos consolidada del modelo feudal caudillista en comparación con las otras tres provincias estudiadas.

Dado el carácter lucrativo, significativo y estratégico de la explotación de litio bajo control provincial y el potencial volumen de ingresos, la provincia sigue siendo de gran interés no solo por sus implicancias regionales, sino también por su papel en la competencia global por minerales estratégicos. Catamarca tiene 14 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo y producción, además de más de una docena de minas de metales y minerales no metálicos.⁷⁵

Esto es particularmente relevante porque, en una provincia donde hay una altísima concentración del poder político y económico en manos de unos pocos grupos familiares, ya se han registrado múltiples casos de corrupción del gobierno provincial en la adjudicación de títulos mineros, disputas por propiedad de tierras y cuestiones de permisos.

Un estudio reciente de la filial argentina de Transparency International concluyó que el riesgo de que las empresas mineras estatales se beneficien “con trato preferencial respecto a los derechos mineros” es “muy alto”, al igual

que el riesgo de manipulación de permisos y captura del Estado por parte de las compañías mineras.⁷⁶

Además del litio, Catamarca es un importante productor de oro y otros minerales, y su frontera con Chile ha sido históricamente una ruta utilizada para el contrabando, la trata de personas y el comercio sexual regional. Sin embargo, de acuerdo con reportes policiales, no es una ruta principal para el tráfico de cocaína, a pesar de informes de 2011 que indicaban que cárteles mexicanos habrían comprado grandes extensiones de tierras en la provincia y establecido más de 1.500 pistas clandestinas para el transporte de cocaína.⁷⁷

No obstante, Catamarca —ahora ingresando en su cuarto período consecutivo de gobernadores alineados con el kirchnerismo— está recurriendo cada vez más al autoritarismo, la coerción y la distribución discrecional de fondos federales sin rendición de cuentas, para mantener el control de economías rentables. El gobernador Raúl Jalil ha viajado a China y otros países en busca de inversiones para nuevos acuerdos de litio, subrayando el rol primordial del gobierno provincial —más que del federal— en la aprobación de permisos.⁷⁸

Gran parte de la corrupción, nepotismo, irregularidades judiciales y estructuras coercitivas identificadas se concentran en la industria minera, el sector económico más activo y lucrativo de la provincia. Los focos de conflicto inmediatos, además de la falta de transparencia,

son la destrucción ambiental causada por la minería del litio y las disputas territoriales con comunidades indígenas que históricamente habitan estas zonas ambientalmente frágiles donde suelen encontrarse los yacimientos.

La minería del litio requiere enormes cantidades de agua —casi 2 millones de galones por tonelada de extracción mineral—, y los yacimientos del Triángulo del Litio se ubican mayormente en altiplanos planos y áridos, entre los lugares más secos del planeta.⁷⁹

Uno de los yacimientos más ricos es la reserva Salar del Hombre Muerto, de 31.000 hectáreas, que comenzó a operar en la década de 1990 y ha generado millones de dólares en ingresos fiscales para la provincia. Cuando empresas extranjeras intentaron expandir la operación en 2021, una coalición de comunidades indígenas y activistas ambientales en Catamarca presentó una demanda para frenar el proyecto.

En una decisión sorpresiva que evidenció los límites del modelo autoritario de Catamarca, las comunidades ganaron el caso, y la Corte Suprema de Catamarca estableció un “precedente histórico en derecho ambiental”. “Establece —como obligación constitucional— que el Estado provincial debe realizar una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral, teniendo en cuenta los distintos proyectos mineros que operan en la zona”, dijo Santiago Kozicki, uno de los abogados indígenas. “También reconoce que hay un daño ambiental

irreversible, ya que las operaciones mineras han secado un río local”.⁸⁰



Figura 15: Mapa de la industria minera de Catamarca, el centro más importante de Argentina.

La reacción inmediata del gobernador Raúl Jalil al denunciar y atacar el fallo judicial —presionando al mismo tiempo para que fuera revertido— demuestra que la victoria de las comunidades indígenas podría ser frágil. El gobierno provincial se apresuró a subrayar que el fallo no se aplicaba a los proyectos mineros ya existentes ni impedía que se aprobaran nuevas operaciones mineras si se realizaba un estudio de impacto ambiental.

Como era de esperarse, las empresas mineras que operan en la provincia apoyaron rápidamente esta interpretación del fallo. Sin embargo, el fallo fue considerado un golpe

importante contra la maquinaria política y judicial Jalil/Kirchner en Catamarca.⁸¹

“La relación entre el poder político y el poder judicial en Catamarca muestra una evolución ambivalente”, afirmó un analista. “Desde el asesinato de María Soledad Morales, ningún gobernador se ha atrevido a realizar un encubrimiento tan grande, pero sigue existiendo una complicidad silenciosa en casos de corrupción administrativa, como se evidencia en el lento avance de las investigaciones por nepotismo, contrataciones irregulares y corrupción.”

Contexto histórico

Cuando colapsó repentinamente en 1990 la dinastía Saadi —encabezada por Vicente y su hijo Ramón, que gobernó esta provincia rica en minerales durante más de cuatro décadas como parte del régimen autoritario peronista—, Catamarca se desvió temporalmente del camino del caudillismo y, desde entonces, no ha retornado por completo a una estructura de gobierno monolítica que controle de forma absoluta la vida política, judicial y económica de la provincia.

En una secuencia de eventos ya conocida, el colapso siguió al mediático caso de violación y asesinato de una joven de 17 años en septiembre de 1990 y al posterior encubrimiento de la complicidad oficial.

El crimen desató las famosas marchas del silencio por María Soledad Morales, quien había sido drogada antes de ser abusada y asesinada. La naturaleza atroz del crimen, junto con la obstrucción policial, la intimidación de testigos, la manipulación de pruebas y los vínculos con la familia Saadi, llevaron a una breve intervención federal y elecciones en 1991 que marcaron el fin de la dinastía Saadi.

Las protestas fueron tan masivas y efectivas gracias a las movilizaciones sociales ya existentes que exigían justicia por los miles de desaparecidos durante los regímenes militares de las décadas de 1970 y 1980. El asesinato de Morales fue un doloroso recordatorio de los abusos recientes, por los cuales la sociedad civil ya demandaba rendición de cuentas.

Estas protestas fueron encabezadas por la monja católica Martha Pelloni, quien ganó notoriedad durante las vigilias por Morales y se ha mantenido como crítica firme de los gobernadores feudales, especialmente Insfrán en Formosa. En una entrevista en 2023, Pelloni afirmó que Insfrán dirige “un gobierno tiránico” que colabora con el narcotráfico, la esclavitud sexual y grupos armados, y que es responsable de “tantas muertes bajo circunstancias sospechosas”.⁸²

En las elecciones que siguieron a la intervención federal, la oposición ganó cuatro elecciones provinciales consecutivas, aunque con tres candidatos distintos. En lugar de librar una guerra contra los funcionarios del

régimen Saadi, la oposición —durante 16 años— fue incorporando gradualmente nuevos actores políticos en la policía, el poder judicial y la legislatura, lo que dio lugar a una estructura gubernamental menos unitaria, incluso tras el retorno de los aliados de Kirchner. Además, el profundo impacto psicológico del caso Morales y el encubrimiento oficial posterior han limitado la tendencia autoritaria en la provincia.

El retorno del ala kirchnerista del peronismo, con Lucía Corpacci en 2011 y 2015, seguida por su protegido Raúl Jalil en 2019 y 2023, demuestra cómo las élites políticas provinciales pueden reconfigurar y adaptar el modelo de caudillo dentro de los límites de la tolerancia pública. Ambos crearon redes significativas de nepotismo dentro del gobierno provincial, una problemática recurrente en provincias remotas con una historia de élites económicas y políticas reducidas.

Por ejemplo, Corpacci, ahora senadora y exgobernadora, es sobrina de un exgobernador y estuvo casada con un primo de Saadi, mientras que Jalil proviene de una familia empresarial prominente, propietaria de medios de comunicación y un banco local.⁸³

A pesar de todo, las irregularidades electorales han sido mucho menores en comparación con otras provincias. Con alrededor del 45 % de la fuerza laboral empleada por el gobierno provincial (una cifra alta, pero inferior a la de otras provincias), tanto Corpacci como Jalil han

dependido considerablemente de los fondos federales para construir máquinas políticas leales basadas en empleos y contratos públicos.

Catamarca ocupa el tercer lugar en nepotismo provincial, después de Jujuy y Formosa, con diez familiares del gobernador o de altos funcionarios empleados por el gobierno.⁸⁴ Aun así, Catamarca presenta niveles de pobreza y exclusión social mucho más bajos que las otras provincias estudiadas, y por debajo del promedio nacional.

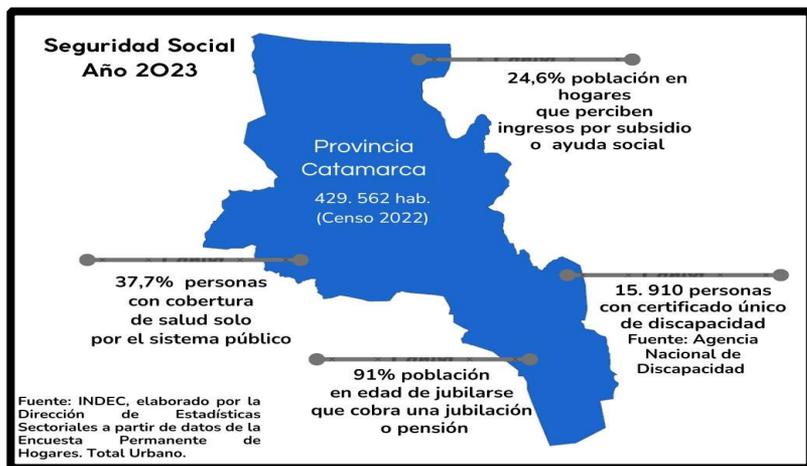


Figura 16: Gráfico del gobierno argentino que demuestra altos niveles de pobreza en la provincia de Catamarca, incluyendo elevados niveles de dependencia de los hogares en el apoyo estatal.

Catamarca representa tanto una muestra de lo lento que ha sido el cambio en la gobernanza feudal en Argentina, como un motivo de cauteloso optimismo: con una sociedad civil activa que responde a los abusos, las estructuras feudales

pueden debilitarse e incluso caer. La provincia es menos autoritaria de lo que fue, pero los avances hacia una mayor liberalización siguen siendo frágiles y no están consolidados.

Conclusiones

El poder e impacto de las estructuras subnacionales de gobernanza feudal, tanto en Argentina como en otros países, es un fenómeno poco estudiado pero de gran relevancia para comprender cómo modelos autoritarios pueden prosperar dentro de un país que, a nivel nacional, mantiene normas e instituciones democráticas débiles pero funcionales.

La estructura constitucional fuertemente provincial y autónoma de Argentina ha tenido como efecto la concentración del poder en manos de gobernadores, que operan lejos de la capital Buenos Aires, en regiones remotas donde la presencia del Estado nacional históricamente sólo se percibe durante las campañas electorales.

El sistema de distribución de fondos federales, que teóricamente debería seguir una fórmula equitativa, fue manipulado por los gobiernos kirchneristas para crear una nueva y lucrativa red de patronazgo, asegurando victorias electorales en todo el país. Las cuatro provincias analizadas aquí figuran entre las mayores beneficiarias de ese sistema.

Este modelo, al favorecer a élites políticas y económicas locales, ha mantenido a las provincias bajo estudio en una pobreza estructural, generando un circuito cerrado donde

el gobernador administra empleos, contratos, acceso a educación, salud y servicios públicos sólo a quienes forman parte del aparato provincial financiado por la Nación, excluyendo a quienes se rehúsan a alinearse con el partido de gobierno.

Además, la dependencia estructural bloquea el ingreso de inversiones productivas en estas provincias, salvo que los inversores acepten subordinarse al grupo económico cerrado vinculado al gobernador. En zonas donde menos de la mitad de la población activa tiene empleo formal, la única forma de ascenso económico y social depende de la lealtad al caudillo. La supervivencia del gobernador, a su vez, depende de entregar votos al oficialismo nacional y legisladores sumisos al Congreso.

Romper estas murallas opacas de impunidad, control autocrático y falta de democracia sustantiva es uno de los desafíos clave para el presidente Javier Milei, outsider político que ganó las elecciones en noviembre de 2023, pero que casi no cuenta con representación propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

En un dilema que escapó a una solución para su predecesor no peronista Mauricio Macri (2015-2019), Milei necesita el apoyo del Congreso para implementar su agenda reformista radical, pero la única forma de obtener ese apoyo es trabajar a través de la maquinaria provincial que provee a los legisladores.

Una de las primeras medidas de Milei fue recortar los pagos automáticos del gobierno federal a las provincias, una fuente clave de corrupción y clientelismo para los gobernadores feudales. Sin embargo, Milei, al igual que Macri, ha encontrado necesario evitar de manera creativa sus propios recortes presupuestarios impopulares a las provincias para comprar apoyo político para proyectos clave.

Dado que el partido de Milei cuenta solo con una pequeña minoría de escaños en el Congreso, su principal método para brindar apoyo a los gobernadores ha sido reemplazar las transferencias automáticas del gobierno, que él recortó, con fondos discrecionales mucho más pequeños controlados por la presidencia, conocidos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que supuestamente están destinados a emergencias. Con las elecciones legislativas acercándose en 2025, el gobierno de Milei ya ha distribuido más fondos ATN en el primer trimestre del año que en todo el 2024.

El destino del proyecto de reforma de Milei aún no está escrito, pero, si el pasado es prólogo del futuro, cualquier posibilidad de éxito pasará por los caudillos antidemocráticos que aún gobiernan gran parte de Argentina.

Notas

- ¹ Mariel Fitz Patrick, Iván Ruiz and Sandra Crucianelli, “La Argentina feudal: quiénes son los gobernadores e intendentes que llevan décadas en sus cargos,” Infobae, February 4, 2023, accessed at: <https://www.infobae.com/politica/2023/02/05/la-argentina-feudal-quiénes-son-los-gobernadores-e-intendentes-quellevan-decadas-en-sus-cargos/>
- ² Sarah Chayes, “When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras,” Carnegie Endowment for International Peace, 2017, accessed at: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/CEIP-WhenCorruption-is-the-Operating-System.pdf>
- ³ Douglas Farah, “Lithium Mining in Argentina’s Northwest District: The PRC, Feudal Governors and No Accountability,” IBI Consultants, March 2023, accessed at: https://www.ibiconsultants.net/_upload/mediaandpublications/document/lithium-prc-argentina.pdf
- ⁴ Douglas Farah, “Fourth Transnational Criminal Wave: New Extra Regional Actors and Shifting Markets Transform Latin America’s Illicit Economies and Transnational Criminal Alliances,” Florida International University, Gordon Institute for Public Policy, June 19, 2024, accessed at: https://digitalcommons.fiu.edu/jgi_research/64/ In this study the author identifies the First Wave as Pablo Escobar and the Medellín Cartel’s pioneering mass exports of cocaine to the United States; the Second Wave as the rise of the Cali Cartel and the shift of primary routes from the Caribbean to Mexico for cocaine destined for the U.S. market; the Third Wave as the rise

of the criminalized states of the Bolivarian Revolution led by Venezuela using transnational organized criminal alliances as instruments of state policy; and the Fourth Wave as shifting cocaine markets to Europe, the rise of synthetic drugs and the emergence of new extra regional criminal actors in multiple illicit economies.

- ⁵ Samantha Schmidt et al, “South American waterway becomes a cocaine superhighway–to Europe,” The Washington Post, December 28, 2024, accessed at: https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2024/south-american-cocaine-route-europe/?itid=sr_0_bb920bf6-6c48-4424-ada7-0a0b1c4bb92c
- ⁶ Author interviews with Argentine police and intelligence officials, January 2025 in Buenos Aires.
- ⁷ Douglas Farah and Kathryn Babineau, “Strategic Overview of Latin America: Identifying New Convergence Centers, Forgotten Territories, and Vital Hubs for Transnational Organized Crime,” National Defense University, Institute for National Strategic Studies, January 2019, accessed at: <https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-28.pdf>
- ⁸ Farah, “Fourth Transnational Criminal Wave: New Extra Regional Actors and Shifting Markets Transform Latin America’s Illicit Economies and Transnational Criminal Alliances,” op. cit.
- ⁹ <https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron>

- ¹⁰ Martina Jaureguy, “40 years later, a look back at the day Argentina recovered democracy,” Buenos Aires Herald, December 9, 2023, accessed at:
<https://buenosairesherald.com/human-rights/40-years-later-a-look-back-at-the-dayargentina-recovered-democracy>
- ¹¹ Martín Ardanaz et al, “The Politics of Federalism in Argentina: Implications for Governance and Accountability,” Inter-American Development Bank, Working Paper 37, June 2012, accessed at:
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/89025/1/IDB-WP-327.pdf>
- ¹² Ardanaz et al, op.cit.
- ¹³ Ardanaz et al, op.cit.
- ¹⁴ Ardanaz et al, op cit.
- ¹⁵ “Intervención Federal, Santiago del Estero: Informe Final,” accessed at:
<https://www.horaciocao.com.ar/wpcontent/uploads/2015/06/5-federalismo-fiscal.pdf>
- ¹⁶ See: Douglas Farah, “Back to the Future: Argentina Unravels,” International Assessment and Strategy Center, February 28, 2013, accessed at:
https://www.strategycenter.net/docLib/20130227_BacktotheFuture.pdf

- ¹⁷ Douglas Farah, “The Murder of Alberto Nisman: How the Government of Cristina Fernández de Kirchner Created the Environment for the Perfect Crime,” International Assessment and Strategy Center, March 16, 2015, accessed at: https://strategycenter.net/docLib/20150316_Farah_NismanFinala_031615.pdf
- ¹⁸ Douglas Farah, “La Cámpora in Argentina: The Rise of a New Vanguard Generation and the Road to Ruin,” International Assessment and Strategy Center, May 13, 2013, accessed at: https://www.strategycenter.net/docLib/20130513_LaC%E1mporaFINAL.pdf ;
- ¹⁹ “‘Lluvia de cocaína’ en Santiago del Estero,” *Ámbito Financiero*, February 2, 2017, accessed at: <https://www.ambito.com/edicion-impres/lluvia-cocaina-santiago-del-estero-n3971493>
- ²⁰ Ibid
- ²¹ Martín Ardanaz et al, “The Politics of Federalism in Argentina: Implications for Governance and Accountability,” Inter-American Development Bank, Working Paper 37, June 2012, accessed at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/89025/1/IDB-WP-327.pdf>
- ²² Ibid
- ²³ This formula of disbursing percentages of national taxes on fuel and other commodities is called co-participation (*Coparticipación*), which has automatic distributions and

discretionary distributions made by the presidency. It was designed to fund education, health and literacy programs. See: José Giménez, “Coparticipación federal: cómo se reparte la recaudación de impuestos entre las provincias,” Chequeo, October 5, 2023, accessed at:

<https://chequeado.com/lexplicador/coparticipacion-federal-como-se-reparte-la-recaudacion-de-impuestos-entre-las-provincias/>

²⁴ Marcelo Capello, Jonás Alvarado et al, “Que provincias recibieron más transferencias discrecionales en los últimos 25 años?” Fundación Mediterránea, November 2020, accessed at:

https://www.ieral.org/images_db/noticias_archivos/4304-Foco%20Fiscal.pdf

²⁵ Martín Ardanaz et al, op. cit.

²⁶ Farah, “Lithium Mining in Argentina’s Northwest District: The PRC, Feudal Governors and No Accountability,” op. cit.

²⁷ “Investigación al borde de la resolución: el fraude millonario en Chaco que salpica a Formosa,” Diario El Comercial, April 4, 2025, accessed at: <https://www.elcomercial.com.ar/42638-investigacion-al-borde-de-la-resolucion-el-fraudemillonario-en-chaco-que-salpica-a-formosa> ²⁸ Martín Ardanaz et al, op. cit.

²⁹ Daniela Rodriguez, “‘Insfrán replica el modelo Maduro;’ La oposición de Formosa repudió los dichos del gobernador y

pide la intervención de la provincia,” Infobae, December 21, 2024, accessed at:

<https://www.infobae.com/politica/2024/12/21/insfran-replica-el-modelo-maduro-la-oposicion-en-formosa-repudiolos-dichos-del-gobernador-y-pide-la-intervencion-de-la-provincia/>

³⁰ Formosa’s lithium deposits are co-located with oil fields, unlike deposits in other areas, making it more expensive to extract. See: “Planta de litio en Formosa: la particularidad que la distingue del mundo,” Minería Sostenible, June 5, 2023, accessed at:

<https://mineriasustentable.com.ar/contenido/7521/planta-de-litio-en-formosa-la-particularidad-que-ladistingue-en-el-mundo>

³¹ Author interview with senior Argentine police official whose office has several open investigations against Insfrán, April 2025.

³² Carlos M. Reymundo Roberts, “El modelo Insfrán: una provincia con dueño y sin actividad privada,” La Nación, May 28, 2020, accessed at: <https://www.lanacion.com.ar/politica/el-modelo-insfran-provincia-dueno-casi-sin-nid2370943/>

³³ Author interview with senior Argentine police official whose office has several open investigations against Insfrán, April 2025.

³⁴ Ibid

- ³⁵ “Solutions to the Historic Violation of Indigenous Rights Will Only be Found Through Respectful Dialogue, in Good Faith, With Indigenous Peoples,” Amnesty International, 2009.
- ³⁶ Insight Crime Formosa Criminal Economies, March 15, 2021, accessed at: <https://insightcrime.org/argentinaorganized-crime-news/formosa-argentina/>
- ³⁷ Author interviews and document reviews, January and March 2025.
- ³⁸ “La sobrina de un gobernador es dueña de un camión que llevaba dos toneladas de droga,” Infobae, October 19, 2016, accessed at: <https://www.infobae.com/sociedad/2016/10/19/la-sobrina-de-un-gobernador-es-duena-de-un-camioncon-2-toneladas-de-droga/>
- ³⁹ See for example her nationally televised March 25, 2021, interview on TN, accessed here: <https://www.youtube.com/watch?v=pliyp3R-XYA>
- ⁴⁰ “‘Vinieron a matarme’: el intendente de Las Lomitas denunció al gobierno de Gildo Insfrán por intento de asesinato en Paraguay,” Infobae, October 28, 2024, accessed at: <https://www.infobae.com/politica/2024/10/28/vinieron-amatarme-el-intendente-de-las-lomitas-denuncio-al-gobierno-de-gildo-insfran-por-intento-de-asesinato-en-paraguay/>
- ⁴¹ Law enforcement analysis seen by author, May 2025.

⁴² Martina Jaureguy, “Chaco elects governor under shadow of Cecilia Strzyzowski’s disappearance,” Buenos Aires Herald, September 17, 2023, accessed at:

<https://buenosairesherald.com/politics/chaco-elects-governor-under-shadowof-cecilia-strzyzowskis-disappearance>

⁴³ Julio Calzada, Sofía Corina, and Blas Rozadilla, “The Economy of Chaco and Santiago del Estero.” Bolsa de Comercio de Rosario No. 1873, September 6, 2018, accessed at: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-ydesarrollo/bcr-weekly-news/news-informativo-semanal/economy-chaco-and>

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ For example, the Corrientes port on the Paraná river is operated by Terminal Portuaria Corrientes S.R.L., a private company, and exports tobacco, foodstuffs, and other goods produced in the province. See “Corrientes: Quick Info.” Antares Ship Agents, accessed at: <https://antareshipping.com/northern-ports/corrientes/>

⁴⁶ Lucia Sigal, “Argentina Judge Halts Deforestation of Chaco Forest in Rare Move.” Reuters, August 18, 2024, accessed at: <https://www.reuters.com/world/americas/argentina-judge-halts-deforestation-chaco-forest-rare-move2024-08-19/>.

⁴⁷ Alejandro Radrizzani, “Gran Chaco: El Segundo Pulmón de Sudamérica Puede Conservar y Producir.” *El Economista*, August 10, 2023, accessed at:

<https://www.fontagro.org/new/noticias/522/en/gran-chaco-the-second-lung-of-southamerica-can-serve-and-produce>

⁴⁸ “Argentina Organized Crime News: Chaco Report,” *InSight Crime*, March 15, 2021, accessed at: <https://insightcrime.org/argentina-organized-crime-news/chaco-argentina/>

⁴⁹ Author interviews with counter narcotics police officials and police reports seen January 2025. See also: “Argentina Organized Crime News: Chaco Report,” *InSight Crime*, March 15, 2021, accessed at:

<https://insightcrime.org/argentina-organized-crime-news/chaco-argentina/>

⁵⁰ Interview with anti narcotics police officials, January 2025, Buenos Aires.

⁵⁰ “Detuvieron a Mauro Andión por la mega corrupción en el IAFEP,” *La Voz del Chaco*, October 3, 2024, accessed at: <https://www.diariolavozdelchaco.com/2024/10/03/detuvieron-a-mauro-andion-por-la-mega-corrupcion-en-el-iafep/>

⁵² Martín Angulo, “Detuvieron en Chaco al jefe de una organización que hacía negocios con el gobierno de Capitanich: en los videos se ve a menores contando billetes,” *Infobae*, April 24, 2005, accessed at:

<https://www.infobae.com/judiciales/2025/04/24/detuvieron-en-chaco-al-jefe-de-una-organizacion-que-hacianegocios->

[con-el-gobierno-de-capitanich-en-los-videos-se-ve-a-menores-contando-los-billetes/](#)

⁵³ “Chaco governor minimizes political ties with femicide suspects,” Buenos Aires Herald, June 18, 2023, accessed at: <https://buenosairesherald.com/politics/chaco-elections-governor-minimizes-political-ties-with-femicide-suspects> ⁵⁴
“Seven people remanded in custody for Cecilia Strzyzowski’s Murder,” The Buenos Aires Herald, July 1, 2023, accessed at: <https://buenosairesherald.com/society/seven-people-remanded-in-custody-for-cecilia-strzyzowskis-murder>

⁵⁵ Author interview with police investigator, January 2025, Buenos Aires.

⁵⁶ Mariano Vidal, “La Justicia de Chaco bajó la imputación de Emerenciano Sena y Marcela Acuña: no serán juzgados como autores del crimen de Cecilia Strzyzowski,” Clarín, August 20, 2024, accessed at: https://www.clarin.com/policiales/caso-cecilia-strzyzowski-justicia-chaco-redujo-imputacion-emerenciano-senamarcelaacuna_0_IvBhPSPWQZ.html?srsId=AfmBOopZfY1Jg_hiP1nXhQXoS7o3EE8YJvxYAdGjH09DxsBOcvbJAgdq

⁵⁷ Author interview, January 2025, Buenos Aires.

⁵⁸ Jorge Zarate, “Primeras Prospecciones en el Chaco Buscando el Requerido Litio.” La Nación, May 19, 2024, accessed at: <https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2024/05/19/primeras-prospecciones-en-el-chaco-buscando-elrequerido-litio/>

⁵⁹ The lawsuit was dismissed by the country’s highest appeals court. See: “Tribunal de Alzada Confirma Absolución de Director de la Clave Querrela por Calumnia.” La Clave, March 10, 2023, accessed at:
<https://www.laclave.com.py/2023/03/10/tribunal-de-alzada-confirma-absolucion-de-director-de-la-clave-en-querellapor-calumnia/>

⁶⁰ This section is updated and adapted from extensive fieldwork in Santiago del Estero in 2022 See: Douglas Farah, “Case Study in Transnational Criminal Convergence: Santiago del Estero, Argentina,” IBI Consultants, November 2022, accessed at:
https://www.ibiconsultants.net/_upload/mediaandpublications/document/sde-argentina-report.pdf

⁶¹ Analia Argento, “Claudia Ledesma, la elegida de Cristina Kirchner, será president de la nación durante 32 horas,” Infobae, February 3, 2020, accessed at:
<https://www.infobae.com/politica/2020/02/03/claudia-ledesma-la-elegida-decristina-kirchner-sera-presidenta-de-la-nacion-durante-32-horas/>

⁶² Author interviews, Buenos Aires, January 2025.

⁶³ Candela Ini, “Santiago del Estero: viaje a la maquinaria de poder de los favoritos de Cristina Kirchner,” La Nación, February 23, 2020, accessed at:
<https://www.lanacion.com.ar/politica/santiago-del-estero-viaje-a-la-maquinaria-depoder-de-los-favoritos-de-cristina-kirchner-nid2336506/>

⁶⁴ Ini, op. cit.

- ⁶⁵ Author interview, September 2022, Buenos Aires.
- ⁶⁶ Geoffrey Ramsey, “Ruta 34: Argentina’s ‘White Road’ of Cocaine Smuggling,” InSight Crime, November 22, 2012, accessed at: <https://insightcrime.org/news/analysis/ruta-34-argentina-cocaine-smuggling/>
- ⁶⁷ “Encontraron más de 150 kilos de cocaína en camión que transportaba bananas,” Infobae, March 30, 2025, accessed at: <https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2025/03/31/encontraron-mas-de-150-kilos-de-cocaina-en-un-camionque-transportaba-bananas/>
- ⁶⁸ “‘Bombardeo’ narco en Santiago del Estero: 1.880 kilos de cocaína y dos detenidos,” Clarín, August 2, 2017, accessed at: https://www.clarin.com/policiales/bombardeo-narco-santiago-estero-1800-kilos-cocaina-detenidos_3_HJbmingG.html
- ⁶⁹ Nahuel Gallotta, “Los ejecutivos de la cocaína: quienes son y cual es la nueva ruta,” Clarín, May 13, 2022, accessed at: https://www.clarin.com/policiales/ejecutivos-cocaina-nueva-ruta_0_5mi8Zqlxc3.html
- ⁷⁰ “‘Lluvia de cocaína’ en Santiago del Estero,” *Ámbito*, February 2, 2107, accessed at: <https://www.ambito.com/edicion-impresa/lluvia-cocaina-santiago-del-estero-n3971493>

⁷¹ “Santiago del Estero: denunciarán ante ONU ‘muertes, torturas y amenazas’ por parte de la policía,” Perfil, April 4, 2022, accessed at:

<https://www.perfil.com/noticias/politica/santiago-del-estero-denunciaran-ante-la-onu-muertestorturas-y-amenazas-por-parte-de-la-policia.phtml>

⁷² “Informe Violación derechos humanos Santiago del Estero – Argentina,” Interamerican Institute for Democracy, September 13, 2024, accessed at:

<https://www.intdemocratic.org/comiteddhh/informe-del-comite-de-derechos-humanos-interamerican-institute-for-democracy-denuncia-violacion-de-derechos-humanos-en-santiago-del-esteroargentina.html>

⁷³ “Patricia Bullrich explotó por un escándalo político en Santiago del Estero,” MDZ Política, September 30, 2022, accessed at:

<https://www.mdzol.com/politica/2022/9/30/patricia-bullrich-exploto-por-un-escandalo-politico-ensantiago-del-estero-278815.html>

⁷⁴ Author interview, January 2025, Buenos Aires,

⁷⁵ Catamarca Province mining website, accessed at:
<https://www.invertirencatamarca.com/en/mining>

⁷⁶ Poder Ciudadano, “Corruption Risks in Mining Concessions: Opportunities for Integrity and Transparency in the Mining Sector of Argentina,” Amnesty International Argentina, April 2020, accessed at: <https://transparency.org.au/wpcontent/uploads/2021/10/Argentina-report.pdf>

⁷⁷ “Mexican Drug Flight Use Landing Strips in North Argentina: Report,” InSight Crime, October 26, 2011, accessed at: <https://insightcrime.org/news/brief/mexican-drug-flights-use-landing-strips-in-north-argentina-report/>

⁷⁸ “Catamarca governor visits China for lithium investment drive,” Buenos Aires Herald, April 3, 2023, accessed at: <https://buenosairesherald.com/business/mining/catamarca-governor-visits-china-for-lithium-investment-drive>

⁷⁹ “Communities in the Salar of Hombre Muerto Celebrate Argentine Court’s ruling to suspend New Lithium Mining Permits,” Coalition for Human Rights and Development, March 14, 2024, accessed at: <https://rightsindevelopment.org/news/lithium-mining-argentina-court-ruling/>

⁸⁰ Ibid

⁸¹ “Lithium permit freeze limited to new projects, says Catamarca,” Buenos Aires Herald, March 14, 2024, accessed at: <https://www.batimes.com.ar/news/economy/lithium-permit-freeze-limited-to-new-projects-says-catamarca.phtml>

⁸² Martin Barillas, “Renowned Human Rights Campaigner says Argentina is ‘Destroyed,’” The Lincoln Memo, April 24, 2023, accessed at: <https://lincolnmemo.com/renowned-human-rights-campaigner-says-arge>

⁸³ Author interviews with police officials, January 2025, Buenos Aires.

⁸⁴ “Parientes del Estado: al menos 146 familiares de gobernadores, vices e intendentes,” Ruido, June 1, 2023, accessed at: <https://elruido.org/parientes-en-el-estado-al-menos-146-familiares-de-gobernadores-vices-e-intendentes/>

⁸⁵ “Tensiones por el reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre Gobierno y gobernadores,” El Esquiú, April 20, 2025, accessed at: <https://www.elesquiú.com/nacionales/2025/4/20/tensiones-por-el-reparto-delfondo-de-aportes-del-tesoro-nacional-atn-entre-el-gobierno-gobernadores-551242.html>